



OIET
OBSERVATORIO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO



COVITE
Colectivo de Víctimas
del Terrorismo

TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO

TRÁFICO Y CONTRABANDO DE ARMAS EN EL NORTE DE ÁFRICA Y EL SAHEL



GOBIERNO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DEFENSA

SECRETARÍA GENERAL DE
POLÍTICA DE DEFENSA



OIET

OBSERVATORIO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

**TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO:
TRÁFICO Y CONTRABANDO DE ARMAS EN EL
NORTE DE ÁFRICA Y EL SAHEL**

ANA AGUILERA

© de la edición: COVITE, 2023

COVITE

Apdo. de Correos 3358

20080 San Sebastián (Guipuzkoa) (España)

© de los textos: Su autor

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse o transmitirse de ninguna forma o por ningún medio, sea electrónico, mecánico, reprográfico, fotoquímico, óptico, de grabación o cualquier otra forma de almacenamiento de información o sistema de recuperación, sin el permiso previo y por escrito del editor.

Texto: Ana Aguilera

Coordinación: Carlos Igualada

Diseño: Romina da Silva

Resumen

El contrabando y el tráfico de armas constituyen dos de los mayores retos a la seguridad en el norte de África y el Sahel, especialmente por sus conexiones con el extremismo violento. La dinámica de este mercado criminal implica el movimiento de armas y munición a través de las fronteras, ya sea por medios legales o ilegales, con el objetivo de equipar tanto a grupos violentos como a actores que buscan protección frente a un clima de inseguridad severo.

La mayor disponibilidad de armas en el Sáhara-Sahel durante la última década, especialmente en el contexto postrevolucionario del colapso del régimen en Libia en 2011, ha provocado un aumento de los conflictos, incluyendo la irrupción del extremismo violento en países como Mali, Burkina Faso, Níger o Nigeria, lo cual ha causado pérdidas de vidas humanas, desplazamientos y varapalos económicos.

Este informe de investigación ofrece un análisis sobre la intersección entre el terrorismo y el crimen organizado en las regiones del norte de África y el Sahel, poniendo el foco de atención en el tráfico y contrabando de armas. El documento busca ofrecer respuestas a la compleja dinámica de estas actividades delictivas y su impacto en la seguridad, la estabilidad y el desarrollo regionales. Mediante una combinación de estudios de casos y análisis de fuentes primarias y secundarias, el informe pone de relieve los principales actores implicados en el comercio ilícito de armas, incluyendo grupos terroristas, redes delictivas y servidores públicos. También examina los factores socioeconómicos que impulsan la demanda de armas, como la violencia local, los conflictos y la debilidad de la gobernanza. El informe concluye con una serie de recomendaciones para los responsables políticos y profesionales del sector de la seguridad sobre cómo mejorar la cooperación regional y abordar las causas profundas del tráfico y el contrabando de armas en el norte de África y el Sahel, con el objetivo último de promover la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en la región.

INDICE

1. Introducción.....	6
2. Contextualización de la economía ilícita en la región.....	10
2.1. Los conflictos armados y su impacto en el contrabando y tráfico de APAL.....	13
2.2. Condiciones geográficas y políticas facilitadoras de la economía ilícita en la región.....	22
2.3. Actores que refuerzan el sistema ilícito actual de proliferación de armas a escala regional.....	28
3. Las dinámicas del contrabando y tráfico de armas y su conexión con el terrorismo en la actualidad.....	35
3.1. El mercado criminal de armas como método operacional y financiero del terrorismo.....	36
3.2. El mercado de armas y su conexión con el terrorismo en el norte de África: el caso de Libia.....	43
3.3. El mercado de armas y su conexión con el terrorismo en el Sahel.....	52
Las fuentes de origen de las armas en el Sahel.....	55
4. Panorama de las estrategias de lucha contra el terrorismo y el tráfico y contrabando de armas en el norte de África y el Sahel.....	66
4.1. Políticas públicas de prevención y respuesta de alcance multinivel.....	67
4.2. Propuesta de nuevas políticas y estrategias para la seguridad y el desarrollo en el norte de África y el Sahel.....	76
4.3. Debate sobre los factores que podrían dificultar la implementación de nuevas políticas.....	84
5. Conclusión.....	95
6. Referencias.....	99

1. Introducción

Entre noviembre y diciembre de 2020, una operación de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), denominada KAFO II, desarticulaba una serie de redes de tráfico de armas destinadas a abastecer al terrorismo en África Occidental y el Sahel, interceptando armas de fuego, municiones y explosivos ilícitos¹. El Secretario General de INTERPOL defendía, en el marco de esta operación, la necesidad de conectar los puntos entre los casos de delitos relacionados con el tráfico de armas y el terrorismo, una advertencia que secunda la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas al apuntar al nexo entre el terrorismo, las armas y la delincuencia como una amenaza creciente para la paz y la seguridad internacional y un obstáculo para el desarrollo sostenible (Oficina de Lucha contra el Terrorismo, n.d.).

Más recientemente, en junio de 2022, otra operación policial internacional coordinada por INTERPOL, en la que participaron más de 520 funcionarios de más de una treintena de puntos críticos de África Occidental, denominada TRIGGER VIII, se saldó con la detención de 120 personas y la desarticulación de 14 redes criminales dedicadas al tráfico de armas. En esta operación no solo se incautaron miles de piezas y componentes de armas de fuego, municiones y dinero en efectivo, sino también decenas de kilos de oro extraído ilícitamente y explosivos. Esto hizo sospechar a los agentes de los vínculos entre el tráfico de armas de fuego incautadas en la operación, la delincuencia organizada transnacional y la financiación del terrorismo, por lo que las autoridades también pusieron en marcha más de 85 investigaciones activas al respecto (INTERPOL, 2022).

En un contexto global de degradación del panorama de seguridad global marcado por la multiplicación exponencial de los conflictos violentos y la

¹ La primera fase de la Operación Kafo fue llevada a cabo en África Occidental en noviembre de 2019 bajo la coordinación conjunta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Programa de INTERPOL sobre Armas de Fuego.

vuelta a un periodo de confrontación entre actores armados, la incautación de más de medio millón de armas se ha convertido en una fuente importante de preocupación para la comunidad internacional (Kangaspunta et al., 2020:7). El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha recibido en numerosas ocasiones la atención pública denunciando el riesgo de que el extremismo violento se beneficie de la delincuencia organizada transnacional directa o indirectamente en algunas regiones, y, según el historial de evidencias que se tratarán a lo largo de las siguientes páginas, el tráfico de armas ocupa un espacio preferente en este entramado delincuenciales.

Después del tráfico y contrabando de personas, las armas pequeñas y ligeras (APAL) constituyen el mercado criminal más expandido en África. La resistencia de la economía ilícita de armas constituye uno de los factores más estratégicos, al ser bienes duraderos y de gran valor por su capacidad de doble uso. La posesión de armas de fuego puede servir como medio de ataque a grupos armados (uso directo) o como herramienta de control sobre un determinado sector de población o territorio (uso indirecto) (Demuynck et al., 2020:2). También contribuye a la financiación de un determinado grupo, pudiendo confiar o complementar sus ingresos a través de la venta de armas o permiso de protección y paso (financiación directa), así como contribuir como vector de facilitación de otras actividades generadoras de ingresos, incluyendo el chantaje, la extorsión, los impuestos o los secuestros a cambio de un rescate (financiación indirecta). Es por esto por lo que el impacto desestabilizador del mercado de armas, donde se encuentran implicados directa e indirectamente los movimientos terroristas, trasciende su único valor monetario, aumentando el grado de amenaza tanto para la seguridad regional como para la estabilidad a nivel político, económico y social (Demuynck et al., 2020:2).

Paralelamente a las dinámicas y el flujo de armas en circulación a lo largo del continente, el epicentro de la actividad terrorista a nivel mundial se encuentra experimentando una rápida transformación, desplazando el centro gravitatorio de su ámbito de operaciones desde Oriente Medio y Asia central hacia los países que conforman el Sahel, convirtiéndose esta región en el centro

gravitatorio de la actividad terrorista a escala mundial en la actualidad (Igalada, 2022:30). Tal y como se desarrollará a lo largo de los siguientes capítulos, filiales de Al Qaeda como el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (también conocido como coalición JNIM, por sus siglas en árabe), las ramas territoriales de Daesh en el Sahel (EI-Sahel) y en África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) y el grupo nigeriano Boko Haram se encuentran capitalizando el deterioro del orden público en la región occidental del continente y, en algunas zonas, sustituyéndolo. La proyección de aumento de poder de estos y otros grupos extremistas violentos, especialmente en un contexto donde la balanza de poder de la insurgencia radical se reequilibra con frecuencia, aumenta la proliferación de la inestabilidad y el deterioro de seguridad en puntos de tránsito estratégicos de la región, aproximándose cada vez más a las zonas de mayor crecimiento urbano.

Las regiones del norte de África y el Sahel se han enfrentado en los últimos años a amenazas añadidas que impactan directamente contra su seguridad y que cuentan con gran capacidad de alimentar los conflictos en curso. El primero ha experimentado un aumento de las turbulencias políticas y agitación social en los últimos años, con capítulos de desórdenes sociales agravados por una serie de factores en parte exógenos, mientras que el segundo se ha visto asolado por una exponencial violencia extremista, tensiones intercomunitarias y un conflicto humanitario con sus consecuentes riesgos asociados. Al mismo tiempo, estas regiones también han experimentado un aumento del tráfico de armas, con organizaciones delictivas tanto nacionales como internacionales que aprovechan la inestabilidad y la débil gobernanza de la zona para promover sus intereses geoestratégicos.

Si ponemos el foco en estos actores criminales, vemos cómo el Sahel se ha convertido en una importante zona de tránsito de redes y armas procedentes de distintas partes del mundo, a medida que los grupos delictivos aprovechan la debilidad del control fronterizo de personas y mercancías en algunos países. A pesar de los numerosos mandatos aprobados por la ONU entre 2006 y 2015 prohibiendo la venta o el suministro de armas a países en conflicto o

con un bajo historial de cumplimiento de derechos humanos, también a nivel regional (como la Declaración de moratoria sobre la importación, exportación y fabricación de armas ligeras en África Occidental de 2008), las autoridades ven circular más de 12 millones de armas pequeñas y ligeras en el interior de sus fronteras en la actualidad. Su origen es tanto desde el interior del continente e intrarregional como global, sosteniendo un mercado ilícito armamentístico que agrava la actual situación de degradación de su seguridad. Con este diagnóstico, la región occidental y septentrional del continente se encuentra en un momento especialmente grave, con una insurgencia y un desasosiego del sector civil constantes especialmente en países como Mali, Burkina Faso o Nigeria.

El fenómeno de tráfico de armas en el Magreb y el Sahel no es sólo un problema de seguridad, sino también humanitario. La proliferación de armas en estas regiones ha contribuido a la escalada de violencia, provocando la pérdida de vidas humanas, el desplazamiento de comunidades, el colapso de sus sistemas sanitarios y obstaculizando el desarrollo económico. La proliferación de armas y la presencia de un gran número de refugiados y desplazados internos por la violencia derivada de las disputas por el poder criminal también agravan estos problemas y terminan por añadir un mayor riesgo de externalización del conflicto.

El presente informe se propone realizar un ejercicio de comprensión global de la magnitud y naturaleza del tráfico de armas en el norte de África y la región del Sahel y su relación con el terrorismo. Identificar las principales fuentes, condiciones y actores implicados en el tráfico de armas regional es esencial para esclarecer la dimensión del desafío, así como para evaluar la eficacia de las estrategias actuales para combatir el crimen organizado y reducir la amenaza terrorista en la zona. El documento también aborda una serie de recomendaciones sobre las medidas que deben adoptarse en el futuro para abordar la intersección entre ambos fenómenos delictivos en un entramado delincuenciales que amenaza con expandirse tanto a través de la geografía africana como hacia la frontera con Europa. La investigación contribuirá, en

su etapa final, a la difusión de conocimientos sobre la relación entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo en África, en este caso focalizado en el estudio del crimen organizado dedicado al tráfico y contrabando de armas de fuego. Las conclusiones del estudio serán de utilidad para los responsables políticos, profesionales del ámbito de la seguridad y actores participantes en la región y a escala internacional, en su intento de desarrollar estrategias eficaces para combatir ambos retos para la seguridad internacional.

2. Contextualización de la economía ilícita en la región

El tráfico y contrabando de armas de fuego forma parte de un entramado de mercados criminales fuertemente interconectados a través de África Occidental y el interior del Sahel. La existencia de flujos ilícitos, donde no se incluyen solo armas sino también drogas, migrantes, bienes o recursos naturales, constituyen una fuente sólida de beneficios tanto económicos como de poder, proporcionando una importancia sustancial para el comercio lucrativo que ha imperado en el continente desde hace siglos.

El tráfico y contrabando de APAL, junto con el tráfico y trata de migrantes, constituyen dos de los ámbitos más extendidos de la economía ilícita en África Occidental. En el caso de las armas, su elevado grado de monetización y su durabilidad y empleabilidad en conflictos violentos lo hace un recurso atractivo para numerosos actores criminales. El uso de todo tipo de armas pequeñas, incluidas ametralladoras, rifles, granadas y pistolas, ha terminado con la vida de miles de civiles y han sido empleadas en conflictos violentos en países como Sudán, Uganda, Sierra Leona, Ruanda, Angola, la República Democrática del Congo o Somalia². La disposición de este tipo de material, proveniente de

2 Según la Conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas en todos sus aspectos (2001), “ejemplos de armas pequeñas son los revólveres y pistolas automáticas, los fusiles, las pistolas ametralladoras, los fusiles de asalto y las ametralladoras ligeras. Las armas ligeras incluyen las ametralladoras pesadas, algunos tipos de lanzagranadas, los cañones antiaéreos y antitanques portátiles y los lanzadores portátiles de sistemas de misiles antiaéreos.” Esta clasificación será la que se tome como referencia a la hora de categorizar las diferentes variedades de armas objeto de análisis del presente estudio.

multitud de fuentes como fuerzas de seguridad abatidas, saqueo de arsenales nacionales, armas interceptadas sin autorización destinadas a otros grupos de combate o aquellas de fabricación casera, permite desviar este recurso estratégico a diferentes conflictos. En consecuencia, los combatientes de muchos de estos países adquieren y reciclan armas de una crisis a otra, una práctica habitual entre individuos y colectivos a menudo promovida por fuerzas de seguridad, intermediarios y señores de la guerra (Pytlak, 2020:4).

Si bien la red de contrabando y tráfico transahariano de bienes ilícitos data desde el año 700 de nuestra era (Nellemann et al., 2015:2), no es hasta bien entrado el siglo pasado cuando se comenzaron a mostrar las primeras evidencias de una relación entre la insurgencia armada de buena parte de los países regionales, especialmente en la zona del norte de África, y los traficantes de armas. A su vez, la disponibilidad de armas, que se había considerado durante mucho tiempo un catalizador del extremismo violento en el norte de África, sobre todo desde antes de 2011, tuvo en la guerra civil de Libia un cambio disruptivo en el panorama regional, alterando la forma en que el extremismo violento afecta a la zona. Los grupos armados islamistas, como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y posteriormente la rama de Daesh en Libia, se aprovecharon de la situación de caos y violencia en volúmenes exponenciales, saqueando arsenales y arrebatando armas y municiones a las fuerzas de seguridad caídas. Por su parte, la corrupción entre los gobernantes y las redes delictivas anteriormente asentadas exacerbaron la inseguridad en los depósitos nacionales de armas.

Actualmente, en África Occidental millones de armas ilícitas se encuentran en circulación y fomentan un estado de temor generalizado por la inseguridad que generan. El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), afiliado a Al Qaeda y que incluye a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), se beneficia de la posesión y el contrabando de armas en las regiones bajo su control, especialmente en Mali. Del mismo modo, la rama de Daesh en Libia utiliza el contrabando de armas para financiar sus células en la región y aumentar su poder y financiación (Security Council Report, 2023:10). Boko Haram, por su

parte, también mantiene cierto grado de colaboración en la subregión saheliana alrededor de la cuenca del lago Chad, lo que permite a los grupos extremistas obtener armas y municiones para sus ataques y extorsionar a la población local.

La proliferación de armas pequeñas y ligeras en África de origen ilegal o de desvío de los canales legales se ha convertido en los últimos años en un importante motivo de preocupación y ha contribuido a una amplia gama de problemas de seguridad. La proliferación de este tipo de armas de fuego ha provocado el desplazamiento de muchos civiles a través del continente y la rápida disponibilidad de estas armas ha terminado por propiciar episodios continuados de reanudación del conflicto. En tiempos de guerra, grandes cantidades de armas inundan el continente, alimentando la violencia y dificultando el cese de hostilidades, lo cual repercute a su vez en el momento donde debe reestablecerse la paz e iniciar un periodo de reconstrucción.

En África Occidental, millones de armas ilícitas se encuentran en circulación y fomentan un estado de temor generalizado por la inseguridad que generan

La economía ilícita de la región es el resultado de una compleja interacción de acontecimientos históricos, condiciones políticas y actores con voluntades e intereses dispares. En el caso de las armas, su tráfico y contrabando suele estar vinculado a países en situación de posconflicto o de conflicto interno, en los que la entrada de armas es frecuente y/o masiva (ENACT, 2018:30). Estas son objeto de tráfico en todo el continente, atravesando fronteras porosas, diferentes jurisdicciones y a grupos armados como principales responsables de su comercio ilegal.

En las últimas décadas, numerosos países africanos han sufrido conflictos de baja y alta intensidad, provocando la entrada de millones de armas pequeñas y ligeras y munición, y equipando a diversos actores estatales y no estatales implicados en los enfrentamientos. Examinar el papel de los conflictos armados resulta clave a la hora de establecer las condiciones que fomentan el surgimiento de uno de los mercados criminales más lucrativos del continente.

2.1 Los conflictos armados y su impacto en el contrabando y tráfico de APAL

Tras la Guerra Fría, África Occidental dependía en gran medida de fuentes externas para cubrir sus necesidades de armamento. Sin embargo, esta tendencia ha disminuido significativamente con el tiempo, ya que el suministro local llegó a satisfacer, con el tiempo, la demanda de armas. Si bien una de las razones de este cambio es la reducción de las guerras civiles desde la década de 1990, muchas armas de fuego que fueron objeto de contrabando durante esa época siguen en circulación y son buscadas precisamente por quienes desean iniciar largos episodios de violencia extrema y disrupción del sistema.

Los choques externos, como el estallido de un nuevo conflicto, han tenido un impacto significativo en los patrones del tráfico de armas no solo en África sino también en Oriente Medio, los cuales a su vez han provocado un efecto en cadena que ha llevado a alimentar otras crisis mediante el suministro de armas y munición. Un patrón notable es la gran acumulación de la producción militar, seguida del colapso del control gubernamental y el conflicto, que ha provocado un aumento significativo del volumen de armas pequeñas y ligeras en circulación. Tras la guerra de Irak de 2003, por ejemplo, se transfirieron más de cuatro millones de APAL del ejército a actores armados no estatales y a la población civil (Bromley, Maletta y Brockmann, 2018:4). Las armas se utilizaron entonces para alimentar la insurgencia contra la coalición y los conflictos internos que estallaron en el país. Junto con las transferencias de estados vecinos y

las capturas en el campo de batalla, estas armas alimentaron la insurgencia contra la coalición internacional y los conflictos internos en Bagdad, Faluya o la provincia de Al Anbar. Del mismo modo, el colapso del régimen de Gadafi en Libia en 2011 hizo posible el saqueo de arsenales pobremente custodiados, lo que dio lugar a la rápida aparición de mercados ilícitos de estos bienes. Además, el acceso más amplio y libre a internet facilitó su venta ilícita en línea. Tanto en Irak como en Libia, la pérdida de armas no sólo afectó a los estados vecinos, sino que también dio lugar a una proliferación a escala regional³.

Si volvemos de nuevo a la década de 1990, tenemos algunos ejemplos de conflictos en África que alimentaron la proliferación de APAL, el auge de extremismos y el deterioro de la seguridad con el paso de los años, sirviendo como precursores de la situación actual de inestabilidad generalizada. Si bien no se pueden analizar todos en profundidad, es necesario hacer una reflexión sobre aquellos que crearon unas condiciones proclives al surgimiento del panorama actual de economías ilícitas en África y al asentamiento de grupos extremistas que operan actualmente en la región de estudio.

Por su parte, la guerra civil argelina producida entre 1991 y 2002 reunió las condiciones propicias para el surgimiento de movimientos extremistas violentos, destacando entre ellos la franquicia de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Argelia fue un actor fundamental en la evolución de AQMI, que surgió como una rama de la guerra civil a finales de la década de 1990. La agrupación, que originariamente se denominaría Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), pretendía distanciarse de las tendencias más violentas y excluyentes del Grupo Islámico Armado (GIA) y centrarse en atacar instalaciones militares y gubernamentales. Con el tiempo, el GSPC amplió sus actividades hacia la región sureña del Sahel, con la esperanza de aumentar sus fuentes de financiación y encontrar nuevas zonas de operaciones, adiestramiento y, eventualmente, reclutamiento. El GSPC acabó jurando lealtad a Al Qaeda en 2006 y pasó a denominarse AQMI en 2007. Esto

³ Sin ir más lejos, los flujos de refugiados de Libia a Túnez durante la revolución supusieron la transferencia de importantes cantidades de armas pequeñas que no fueron controladas en la frontera, extendiéndose el material militar de los arsenales libios a la mayor parte de África Occidental.

marcaría la primera presencia yihadista transnacional real en la región, ya que el grupo pretendía crear un espacio duradero en el que operar y, en ocasiones, gobernar el territorio. A pesar de la ruptura con el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO, por sus siglas en inglés) en 2011, AQMI siguió desempeñando un papel importante en el gobierno del norte de Mali en 2012, especialmente en Tombuctú, y desde entonces ha mantenido una fuerte presencia en estos dos países y en su vecindario más inmediato.



Figura 1: Militantes de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Fuente: Monde Afrique

Aunque las actividades de AQMI se han extendido más allá de sus originarias áreas de influencia, sus raíces en el conflicto civil argelino son fundamentales para comprender su evolución. La expansión del GSPC en el Sáhara estuvo dirigida por Mokhtar Belmokhtar, un antiguo miembro del GIA procedente de una comunidad de árabes saharauis de Argelia, y este a su vez se convertiría en una figura prominente del entramado delictivo de tráfico y contrabando tanto de cigarrillos como de otro tipo de drogas y bienes. Las primeras operaciones de secuestro de AQMI se llevaron a cabo en el sur de Argelia y el norte de Mali, y desde entonces el grupo ha mantenido fuertes vínculos con estas regiones, ahora como parte de la coalición JNIM.

La rebelión tuareg de 1990 en Mali también marcó un punto de inflexión en la historia de la región, con consecuencias de gran alcance para la población del norte de Mali y del Sahel en general. Aunque las comunidades tuareg llevaban mucho tiempo marginados por el gobierno central, la rebelión de 1990 estuvo impulsada en gran parte por el deseo de este grupo de recuperar el control sobre sus tierras y recursos tradicionales⁴. Las revueltas tuvieron varias consecuencias que contribuyeron a la inestabilidad de la región. Por una parte, provocó el desplazamiento de decenas de miles de personas, creando una crisis humanitaria que aún no se ha terminado de resolver. El conflicto trastocó las estructuras sociales y económicas tradicionales, exacerbando la pobreza y la inseguridad alimentaria, y contribuyendo al desarrollo de un gran volumen de desplazados internos y de refugiados. Por otra parte, la rebelión contribuyó a la proliferación de armas y al crecimiento de las redes criminales, algunas de las cuales siguen operando en la región actualmente. El conflicto creó un mercado para el tráfico y el contrabando con relativa facilidad, impulsando el crecimiento y consolidación de fuerzas criminales, incluidos grupos yihadistas, que han aprovechado la inestabilidad para afianzarse en la región. En líneas similares, la rebelión también contribuyó a la erosión de la autoridad estatal y al desmoronamiento de la gobernanza en la zona. El conflicto debilitó la capacidad del Estado para prestar servicios básicos, como la seguridad, la justicia y los bienes públicos, lo que propició el surgimiento de actores no estatales que han buscado llenar ese vacío desde entonces en una situación en la que múltiples grupos compiten por el control. Asimismo, la rebelión contribuyó al crecimiento de una cultura de la violencia y la impunidad, con consecuencias duraderas: se creó así un ciclo de violencia y represalias que ha persistido hasta hoy, con diferentes grupos que utilizan la violencia para conseguir sus objetivos y que han contribuido a crear una sensación de anarquía e inseguridad, socavando aún más los esfuerzos por restablecer la estabilidad y la seguridad.

4 En el centro de la rebelión tuareg había un complejo conjunto de factores, como la sequía y las dificultades económicas, la marginación política y una percibida represión cultural. Los tuareg, un pueblo tradicionalmente nómada, habían dependido durante mucho tiempo de sus rebaños de vacas y cabras para mantener su modo de vida. Sin embargo, la sequía y la degradación medioambiental habían afectado gravemente a la tierra, dificultando cada vez más que los tuareg mantuvieran a su ganado y a sus familias.

La proliferación de armas en la subregión durante el levantamiento tuareg contribuyó a un ecosistema ilícito de oportunidades para actividades delictivas como el contrabando, el bandidaje y el tráfico. Los grupos armados y las milicias se involucraron en estas actividades, y la falta de una gobernanza y seguridad efectivas en la región terminó por facilitar sus operaciones. Además, el conflicto y sus secuelas también crearon un sentimiento de marginación y resentimiento entre algunas comunidades tuareg, lo que alimentó aún más el desasosiego, el malestar social y la percibida necesidad de insubordinación. Esto, a su vez, proporcionó un terreno fértil para que florecieran las actividades delictivas, y ejemplifica cómo los conflictos no solo afectan durante el tiempo que están en activo, sino también una vez han llegado a su fin.

La diseminación y reorientación de los depósitos de armas nacionales, derivadas de la corrupción, las prácticas inadecuadas de gestión o el colapso del control gubernamental tras el fracaso de un estado han alimentado el mercado ilícito y generado inestabilidad al proporcionar armamento a facciones no estatales. En los años anteriores a 2011, Libia poseía uno de los volúmenes de armas convencionales más amplios y diversos de África, no solo en el interior de los arsenales nacionales sino también en manos de civiles (con uno de los más elevados niveles de posesión civil a escala mundial). Además, representaba un nudo fundamental de intercambios ilegales de armas con las naciones vecinas, cuya responsabilidad recaía en gran medida en organizaciones que operaban junto a las fronteras de Libia y que actuaban con el permiso y la supervisión del gobierno de Gadafi. Como veremos en mayor profundidad más adelante, el conflicto en Libia ha supuesto uno de los mayores varapalos a la lucha contra el tráfico y el contrabando de armas y el rearme exponencial del continente africano. La gestión y visión estratégica del dirigente libio, que pasaba por alimentar conflictos y a fuerzas rebeldes para satisfacer sus propios intereses geopolíticos, terminó ejerciendo como un vector facilitador de la proliferación de armamento fabricado en Libia tras la caída de Gadafi, llegando a suministrar material y munición a grupos rebeldes afines al dirigente que gobernó durante sus más de cuarenta años pero también a manos enemigas.

El derrocamiento de Muamar Gadafi y el estallido de la guerra civil en Libia a lo largo de 2011 terminó por provocar el colapso total del país y la proliferación de todo tipo de armas, que desde entonces se ha introducido de contrabando en estados vecinos, como Túnez, Argelia y Mali. La desintegración del país provocó un dramático crecimiento del tradicional comercio tribal de drogas, falsificaciones, migración y armas en la ruta transahariana, llegando a alcanzar picos de hasta 80 millones de dólares distribuidos entre traficantes, clanes y grupos armados (Nellemann et al., 2015:1). El país se convirtió además en un refugio para organizaciones terroristas afiliadas a Al Qaeda y Daesh pero también para grupúsculos de influencia menor fuertemente arraigados a la acción local, permitiéndose desviar armamento de depósitos estatales a través de la región y a otras zonas de conflicto. De hecho, el grupo entonces liderado por Abu Bakr al Baghdadi alcanzó una fase expansiva que le permitió capturar algunos puntos estratégicos de gran importancia, como la ciudad portuaria de Sirte, Derna o Benghazi en 2014, aprovechando el vacío de poder manifiesto tras el colapso del régimen⁵.

La caída del régimen libio liderado por un solo hombre también contribuyó a reducir la necesidad de suministro externo. El extenso y sofisticado arsenal de Gadafi durante sus 40 años de gobierno acumuló un gran número de armas de fuego comunes. De hecho, las investigaciones recogidas en apartados posteriores apuntan al papel fundamental que el aprovisionamiento de armas desempeñó para las milicias procedentes de Libia en el desencadenamiento del conflicto en Mali en 2012, lo cual lleva exacerbando la inestabilidad, incluidos los ataques contra el personal de la ONU y otros objetivos, desde entonces en el espacio fronterizo entre Libia, Argelia y Mali.

El aprovechamiento del acceso a las armas a través de esta zona transahariana ha constituido un factor crítico de control para las rutas comerciales y el control territorial de las milicias rebeldes y los movimientos separatistas. Tal y como se verá más adelante, fuentes consultadas por la misión de evaluación que las Naciones Unidas desplegó en el Sahel indicaron

⁵ No obstante, su poder se ha visto mermado en la actualidad, a pesar de buscar el comando central una reanudación de sus operaciones y escalada de ataques en el país de manera sistemática.

que parte de las armas habían sido introducidas de contrabando en el Sahel por repatriados, especialmente por parte de antiguos combatientes de las filas del ejército libio o mercenarios durante el conflicto. Algunas de las armas, según las autoridades que informaban a la misión, podrían haber permanecido escondidas en el desierto y “venderse a grupos terroristas como Al Qaeda en el Magreb Islámico, Boko Haram u otras organizaciones delictivas” (Security Council Report, 2012:10). También pusieron énfasis en el aumento del comercio de armas en algunos países de África Occidental, por lo que no es extraño que los arsenales libios constituyeran una de las principales fuentes de suministro de armas ilegales a manos de civiles en África Occidental en la etapa post-2011 (Bromley et al., 2018:5).

El estallido del conflicto en Libia está intrínsecamente ligado a la crisis maliense de 2012 por razones históricas, culturales y políticas. La inercia temporal de la rebelión tuareg y el posterior golpe de Estado en Mali provocaron nuevamente el colapso del control del gobierno en el norte del país, creando un vacío de poder que fue ocupado por diversos grupos armados, entre ellos grupos terroristas como AQMI, Ansar Al Din o MUJAO. El conflicto fue desencadenado por el derrocamiento del gobierno maliense en un golpe de Estado y las insurgencias posteriores de varios grupos armados, entre ellos separatistas tuaregs y militantes islamistas. La entrada de armas en la región durante el conflicto ha provocado un aumento del contrabando y el tráfico de bienes ilícitos, distribuyéndolos desde y hacia las porosas fronteras entre Mali y los países vecinos, como Níger y Burkina Faso. Además, el colapso del gobierno libio en 2011, que provocó la proliferación de armas en la región, ha alimentado aún más el comercio de APAL. También permitió la movilidad entre los grupos armados entre Libia y el Sahel y el surgimiento de varios grupos más pequeños, como la Brigada de Guardias Fronterizos 315, dirigida por Cheikh Ahmed Omar Al Ansari, primo hermano del actual líder de JNIM, Iyad ag Ghali (McGregor, 2017:21).



Figura 2: Cajas vacías que contenían MANPADS de la era soviética, en un depósito de armas en Ga'a, Libia. Fuente: Bryan Denton/New York Times/Redux/Harpers

Finalmente, el conflicto en Siria e Irak desencadenó un efecto potenciador del mercado de las armas en el ecosistema de economías ilícitas transregionales. La guerra civil en Siria y el ascenso de Daesh provocaron el flujo de combatientes, armas y dinero hacia y desde el Magreb y el Sahel, alimentando los conflictos y las actividades terroristas en curso en Oriente Medio y capitalizando sus efectos indirectos de vuelta al tablero africano. Las investigaciones apuntan a que este grupo emplea en Siria armamento fabricado sobre todo en Rusia, China y países de Europa central y oriental (especialmente de Rumanía, Hungría y Bulgaria). En Irak, las armas de fabricación china tienen un especial uso por parte de Daesh (más del 50% del total), pero también las provenientes de Rumanía (más del 10%), Hungría y Serbia (aproximadamente el 5% del total respectivamente) (Conflict Armament Research, 2017:14). En ambos países, el tipo más común de arma desplegada (alrededor del 70% tanto en Siria como en Irak) es el fusil de asalto de tipo AK, empleando armamento transferido previsiblemente durante la época de la Guerra Fría (Conflict Armament Research, 2017:16).

Los prolongados conflictos en Siria, Irak pero también en Yemen han provocado un aumento del suministro de armas pequeñas a estas regiones y una escalada del comercio de armas entre sus países vecinos. En Jordania, esto se ha traducido en una proliferación de la posesión de armas por parte de civiles, con armas fácilmente disponibles para su compra en los bazares para aquellos que cuentan con los medios necesarios. Según el Índice Global de Delincuencia Organizada de 2021, los países con mayor actividad de tráfico de armas están inmersos en algún tipo de conflicto, a saber, Siria, Irak, Yemen y Turquía, cada uno de los cuales obtuvo una puntuación de 9 sobre 10 en el índice. El único país que los supera es Libia, que recibió una puntuación de 9,5, ya que, tal y como apunta el presente estudio, sirve de fuente principal para la entrada de armas en la región. Paralelamente, los restos de la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980 han dejado tanto en Irak como en Siria arsenales que siguen circulando en la actualidad. Del mismo modo, las armas de la época soviética utilizadas en las Guerras de los Balcanes de la década de 1990 han llegado a manos de facciones rebeldes en medio de la intrincada guerra civil siria. A pesar de ello, y así se afirma en el informe de la plataforma *Global Initiative Against Transnational Organised Crime* (GITOC), Libia sigue siendo la principal fuente de armas recicladas para la región, permitiendo la guerra de 2011 desplazar el movimiento de armas hacia zonas de conflicto en Oriente Medio (Fares, 2023). Según el Monitor de Economías Ilícitas e Inestabilidad (IEIM) de esta misma plataforma, además, el mercado de armas es el tipo de economía ilícita que guarda una relación más fuerte con elevados niveles de inestabilidad, en comparación con otros mercados criminales. Según este índice, que evalúa la intensidad y la interconexión de los mercados ilícitos, el tráfico de armas se considera un mercado importante en el 54% de los centros clasificados como “alto” o “muy alto” en el IEIM (Bird y Tagziria, 2022:10). Esto significa que es más probable que estos centros tengan fuertes conexiones con otros mercados ilícitos, y también es probable que sean más inestables.

El panorama de seguridad en el Sahel y el norte de África se ha visto asolado por conflictos tanto intraestatales como interestatales, lo que ha provocado una gran demanda de transferencias de armas, tanto legales como ilegales, hacia la región y dentro de ella. La transferencia o el desvío de armas a actores no estatales se ha convertido en un fenómeno habitual en muchos de estos conflictos, y las repercusiones han sido graves por su instrumentalización por parte del islamismo radical a lo largo de la región. Como se verá a lo largo de la próxima sección, las condiciones geográficas y las estructuras de gobierno han jugado un papel muy relevante en la facilitación de este tipo de economías ilícitas intraregionales, con unas dinámicas internas que pervierten el sistema legal de la economía formal y cronifican amenazas securitarias sin capacidad o voluntad de ser erradicadas.

2.2. Condiciones geográficas y políticas facilitadoras de la economía ilícita en la región

La economía ilícita en el norte de África y la región del Sahel es un fenómeno donde confluyen diversas condiciones geográficas y políticas. Entre las principales condiciones que han contribuido al actual estado de proliferación de APAL destacan la debilidad de la gobernanza, la permeabilidad de las fronteras y los limitados recursos de persecución del fenómeno.

Con respecto a la primera, muchos de los países del norte de África y el Sahel cuentan con estructuras de gobierno débiles, lo que dificulta su lucha eficaz contra el crimen organizado transnacional. La corrupción generalizada entre las fuerzas de seguridad, grandes dependientes de la economía ilegal para su supervivencia, contribuyen a la escalada del problema. Algunas fuentes llegan a sugerir que el ascenso al poder en 2011 del presidente nigerino Mahamadou Issoufou se debió en parte a las alianzas que formó con individuos implicados en actividades ilícitas (Micallef et al., 2019:38; Raineri, 2018:79). Su vinculación con el crimen organizado sirvió, de hecho, como justificación de dos grandes levantamientos tuareg en Níger (en los periodos 1990-1995 y 2007-2009). Una de estas alianzas, según las investigaciones de GITOC, se

estableció con Mohamed Rhissa Ali, un poderoso tuareg y propietario de *Rimbo Transport Voyageurs*, la mayor empresa de transporte de Níger (Micallef et al, 2019:38). El rápido crecimiento de *Rimbo Transport Voyageurs*, que en menos de diez años pasó de ser una pequeña empresa local con una flota de tan solo tres autobuses que cubrían la ruta Niamey-Agadez a convertirse en un servicio nacional y, en última instancia, regional, está estrechamente vinculado al papel de la empresa en la infraestructura de la industria de la migración de Níger antes de 2017. La corrupción en algunos países de la región es una práctica arraigada en las relaciones habituales entre individuos e instituciones, especialmente en las zonas fronterizas con controles estatales débiles. La frágil e ineficaz seguridad en la zona y la connivencia entre las redes criminales y las autoridades locales fronterizas han terminado por constituir el caldo de cultivo idóneo para una cultura de la corrupción extendida y prolongada en el tiempo (ENACT, 2019).

En este sentido, la corrupción y la debilidad de la gobernanza en el norte de África y el Sahel se han identificado como dos de los principales factores que han contribuido al aumento del mercado de armas. La presencia de las fuerzas del orden nacionales es limitada en muchas zonas de la región, lo cual ha permitido a los grupos criminales operar con relativa impunidad, beneficiados de sus vastos conocimientos de las rutas de contrabando. Además, las prácticas de abuso de poder en buena parte de las autoridades nacionales y de los funcionarios del gobierno ha facilitado el flujo de armas hacia el interior de sus territorios, contribuyendo a su crecimiento y poder. Como señalan algunos especialistas en seguridad, la inestabilidad política en la región del norte de África desde la irrupción de las revueltas árabes en 2011 provocó que los equilibrios en las dinámicas económicas se alteraran, lo que llevó a la apertura de las rutas y los mercados existentes y la creación de “nuevas oportunidades de explotación por parte de un abanico más amplio [de actores]” (Babuta y Haenlein, 2018:2).

A la corrupción le complementan los episodios de inestabilidad política en la consolidación de las economías ilícitas en África Occidental. Tal y como se ha comentado previamente, conflictos armados como la guerra civil argelina y libia o los episodios de violencia en Mali han provocado la proliferación de armas, el saqueo de arsenales, la deserción de fuerzas de seguridad o la venta de armas a grupos armados y la perpetuación de un ciclo de violencia e inseguridad. Aunque a menudo se presenta a África como un continente plagado de conflictos armados generalizados, investigaciones recientes revelan un panorama de conflictos más complejo (Vik Bakken y Aas Rustad, 2018). Si bien es cierto que el número de conflictos en África es elevado, el aumento de los últimos años puede atribuirse en gran medida a la aparición de movimientos extremistas violentos, que no solo ha desencadenado nuevos conflictos, sino que también ha exacerbado los ya existentes.

Al factor político se le añade el componente geográfico. La región del Sáhara-Sahel se caracteriza por una porosidad en sus fronteras, lo cual facilita a los traficantes de armas el contrabando de armas en la región, al poseer unos cruces fronterizos amplios y permeables. Esto ha sido especialmente problemático en países como Libia, donde el colapso del Estado ha dificultado a las autoridades la gestión, control y seguimiento de sus fronteras y ha permitido la descontrolada circulación de armas, personas y mercancías, facilitando a los criminales el contrabando de armas y otro tipo de bienes. Esta permeabilidad, junto con la debilidad de la gobernanza, provocan que estas regiones sean especialmente susceptibles a la proliferación de todo tipo de economías ilícitas. Las redes criminales se aprovechan de estas condiciones de descontrol y desborde, a menudo utilizando las mismas rutas que las empleadas para el tráfico de drogas, personas y otros tipos de contrabando.

Al hablar de controles aduaneros o seguimiento de entrada y salida de personas y mercancías, resulta relevante apuntar a que la asimilación del concepto de “frontera” desde la perspectiva norteafricana no puede verse desde un prisma exclusivamente político. El componente histórico-cultural de las poblaciones que habitan en las zonas fronterizas que bordean los países

del mapa político de la región influyen en la complejidad de delimitar el punto geográfico donde termina la actuación y la ejecución del poder estatal de uno u otro país, o incluso el reconocimiento y asimilación de la autoridad de las fuerzas del orden, complicando los esfuerzos de mejora de la seguridad en las fronteras. Argelia es un buen ejemplo de ello, país en el que, a pesar de los esfuerzos en la lucha contra el contrabando ilícito de bienes, sigue sufriendo un comercio en aumento, especialmente con Túnez y Libia (ENACT, 2019). En África Occidental, estos factores se ven exacerbados por la proximidad de la región a zonas de conflicto, como Libia y Mali, lo cual acorta los tiempos y rutas de suministro de armas entre combatientes y organizaciones criminales.

Finalmente, muchos de los países de la zona cuentan con una escasa disponibilidad de recursos, lo que les dificulta la lucha eficaz contra el tráfico y el contrabando de armas. La falta de arquitecturas de seguridad destinadas a combatir el tráfico ilícito de armamento y otros bienes, así como la escasa vigilancia, financiación y formación de las fuerzas de seguridad transfronteriza, contribuyen a la magnificación de este fenómeno. De nuevo en el caso de estudio libio, el actual periodo posrevolucionario de conflicto ha debilitado la autoridad del Estado hasta tal punto que ha permitido aflorar numerosas formas de actividad delictiva, incluido el comercio ilícito. Tal y como se verá en su propia sección más adelante, el caso de estudio del país apunta a su transformación como centro neurálgico de la economía ilícita regional y transahariana, englobando actividades como la trata de seres humanos, el tráfico de drogas o el contrabando de petróleo y armas. La ausencia de un gobierno unido y eficaz y los constantes enfrentamientos por el reconocimiento político entre facciones y fuerzas rivales actúan como catalizadores de la economía ilícita como método de supervivencia para grupos armados, movimientos extremistas violentos y servidores públicos.

La corrupción y la debilidad de la gobernanza en el norte de África y el Sahel se han identificado como dos de los principales factores que han contribuido al aumento del mercado de armas

Los factores de subdesarrollo económico desempeñan similarmente un papel significativo en el ecosistema criminal en el norte de África y el Sahel. La economía informal tiene una doble naturaleza, sirviendo como red de seguridad esencial para las personas que carecen de oportunidades de empleo formal y como fuente de financiación, poder e influencia para los grupos de delincuencia organizada.

Por un lado, los altos niveles de pobreza y desempleo en la región abocan a una reserva de reclutas potenciales para los grupos criminales, ya que los individuos pueden ser más propensos a unirse a estos clanes si no son capaces de encontrar una atractiva oportunidad laboral que asegure su subsistencia y la de su familia. En situaciones en las que las oportunidades de empleo formal son escasas, el sector informal proporciona una red de seguridad vital para personas que, de otro modo, serían vulnerables a la pobreza. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informa de que, en algunos países del África subsahariana, entre el 30 y el 90% del empleo no agrícola tiene lugar en el sector informal (Fondo Monetario Internacional, 2017:54). Los países de estudio tienen datos negativos en estas cifras si lo comparamos con el resto del continente. Burkina Faso y Níger se encuentran en una posición más favorable (entre el 30% y el 40% de economía informal), mientras que Mali está más desfavorecido (40-50%) y Nigeria ocupa el puesto más alto de porcentaje de economía informal en el sector no agrícola de toda la región (más del 50%) (Fondo Monetario Internacional, 2017:51). Esto subraya la importancia del sector informal como fuente significativa de empleo para muchas personas que pueden no tener acceso a oportunidades de trabajo formales y como motor clave del crecimiento económico en la región.



Figura 3. Campos en Mubi, Nigeria. Fuente: CC BY-NC-ND / Comité Internacional de la Cruz Roja / Jesús Serrano Redondo

Por otro lado, los beneficios generados por el crimen organizado pueden constituir una importante fuente de financiación, poder e influencia para estos colectivos. De hecho, la influencia de la economía informal vinculada a la delincuencia organizada entre comunidades, especialmente en las fronteras, supone una fuente económica tan robusta que la eliminación del contrabando podría paralizar regiones enteras y alentar el malestar social en caso de no ofrecerse una alternativa económica igualmente enriquecedora. La economía informal ha desempeñado un fuerte papel en el crecimiento del comercio ilícito en la región del norte de África, llegando a aportar el 54% del producto interior bruto de Túnez, el 45% de Argelia y el 20% de Marruecos (ENACT, 2019).

Aunque los beneficios generados por la delincuencia organizada pueden ofrecer oportunidades económicas a algunas personas y comunidades, también contribuyen a un problema estructural de los ingresos del Estado. Esto, a su vez, tiene un impacto devastador en el desarrollo económico y las inversiones en mercados legales. En esencia, las actividades ilícitas de los grupos de delincuencia organizada provocan pérdidas significativas para los gobiernos y

las empresas legítimas que, de otro modo, podrían proporcionar oportunidades económicas a sus ciudadanos. Lo anterior no hace sino influir negativamente en el crecimiento económico, la estabilidad social y la gobernanza política en el largo plazo.

Las economías ilícitas en el norte de África y el Sahel, especialmente el tráfico y contrabando de armas, ha socavado sistemáticamente el desarrollo económico y la estabilidad política e institucional encargada de velar por el Estado de derecho en la región. En general, la dinámica política de la interacción entre el crimen organizado transnacional y las redes locales de apoyo están determinadas por un complejo mosaico de actores, entre los que se incluyen organizaciones regionales e internacionales, gobiernos y actores no estatales. Mientras que algunos actores trabajan para abordar el problema, otros contribuyen a agravarlo con sus acciones u omisiones.

2.3. Actores que refuerzan el sistema ilícito actual de proliferación de armas a escala regional

Los actores que forman parte del entramado de la economía ilícita regional dedicada al tráfico y contrabando de APAL son de una variedad y naturaleza variopintas. Estos van desde grupos beligerantes que persiguen una causa política determinada hasta la propia población civil, deseosa de armarse ante un clima violento prolongado.

La primera categoría es la de grupos extremistas violentos. Si bien la relación entre estos movimientos con el crimen organizado será analizada en mayor profundidad a lo largo del siguiente capítulo, conviene añadir algunos matices que permitan enmarcar el papel de estos actores en el actual ecosistema criminal. En líneas generales, los grupos extremistas ubicados en el norte de África y el Sahel dependen en gran medida del sistema ilícito de armas, usándolo tanto de medio directo como indirecto⁶. Estos grupos suelen adquirirlas por diversos medios, como el contrabando, el robo o la captura de

⁶ Para una mayor comprensión de los tipos de usos de las armas por parte de los grupos terroristas, véase el capítulo introductorio y el apartado 3.1 del presente informe.

material militar. La proliferación de armas pequeñas y ligeras en la región ha facilitado el acceso de estos grupos al armamento, que utilizan para impulsar su agenda de violencia y terror. De hecho, los espacios donde predomina el tráfico de armas tienen más probabilidades de contar con grupos mafiosos de carácter insurgente o terrorista como principales actores delictivos, en comparación con los centros en los que no predomina el tráfico de este bien (Bird y Tagziria, 2022:12).

Una de las principales formas en que los grupos extremistas refuerzan el actual sistema ilícito de proliferación de armas es estableciendo vínculos con otras redes delictivas implicadas en su comercio ilegal. Estas redes operan a menudo a través de múltiples fronteras, y sus conexiones con grupos extremistas les proporcionan una base de clientes fiable para su comercio ilícito. Además, los grupos extremistas actúan a menudo como intermediarios en el mercado de armas, ayudando a facilitar las transacciones entre proveedores y compradores o facilitando las rutas de tráfico y contrabando a cambio del pago de impuestos.

El terrorismo también aprovecha las dinámicas de los conflictos locales para impulsar su programa de proliferación de armas y munición. Los conflictos entre diferentes comunidades y grupos étnicos actualmente en curso en el Sáhara-Sahel, así como entre actores estatales y grupos armados no estatales, suelen implicar el uso de armas de fuego (en una especie de “militarización” de los conflictos), y el extremismo violento aprovecha esta dinámica para adquirir material que pueden utilizar en sus propias operaciones. También refuerzan el sistema ilícito de armas actual aprovechando la debilidad de la gobernanza y la corrupción en espacios de interés. En muchos casos, los funcionarios corruptos y los agentes estatales son cómplices del comercio ilícito armamentístico, ya sea dejando a un lado su responsabilidad de control y monitorización del fenómeno o participando activamente en él. Esto, tal y como se comprobará en los siguientes apartados, crea un entorno propicio para que los grupos extremistas adquieran armas por medios ilícitos.

En segundo lugar se encuentran los grupos delictivos. Las redes criminales se aprovechan del vacío de poder o escaso control de las fronteras en la región para suministrar armas de contrabando. Ejemplos incluyen redes privadas de tráfico ubicadas en Bulgaria, Ucrania y Rusia a cambio de minerales y piedras preciosas extraídas en países como Liberia, Togo y Burkina Faso (Jesse, 2021). La demanda de diamantes accesibles desde Europa, junto con la demanda de armas en África Occidental, han permitido que estos intercambios continúen operando a expensas de las autoridades aduaneras competentes. Por su parte, la porosidad de las zonas fronterizas intrarregionales carga con un gran peso para los traficantes de armas, especialmente en las fronteras entre 1) Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil y 2) Burkina Faso, Costa de Marfil y Ghana.

Al poner el foco específicamente en el comercio de armas, el Índice Global de Delincuencia Organizada de 2019 revela que este es el segundo mercado delictivo más extendido en el conjunto de África, con una puntuación de 5.56 (GITOC, 2021:66). Esto pone de relieve el importante papel de las redes delictivas en esta industria criminal la región del norte y en África Occidental, así como en otras partes del continente. El comercio ilícito de APAL se ve facilitado por los conflictos y la inestabilidad constantes, especialmente en las zonas rurales, que crean oportunidades para que la delincuencia organizada se expanda y explote las rutas y los suministros que por allí transitan, y se ven alimentados por el tráfico de armas, drogas y otros productos básicos que se entrelazan con las economías de guerra emergentes.

La relación entre delincuencia organizada y conflicto se refuerza mutuamente, ya que las economías ilícitas desempeñan un papel en todas las fases del conflicto, contribuyen a él y lo mantienen. Además, la perpetuación de los conflictos incita a la delincuencia organizada, lo que conduce a una dinámica arraigada de alta criminalidad y baja resiliencia. Teniendo en cuenta los datos del anterior informe, esto es especialmente evidente en los países que sufren conflictos prolongados, como Somalia, Sudán del Sur, República Centroafricana y Libia, que presentan los niveles más bajos de resiliencia. La

presencia de la delincuencia organizada en este último, de hecho, se remonta a la época de corrupción y depredación dirigida por el Estado durante el régimen de Gadafi, que dependía en gran medida de las redes delictivas para su propia supervivencia y expansión, tal y como se verá en su propia sección.

Sin embargo, en los países de la región con índices de menor resiliencia y mayor criminalidad también se engloban Níger, Sudán, Chad, Camerún o Mali. En este último, el mercado criminal es tan sólido que opera al margen de los cambios políticos del momento. A pesar de haberse producido recientes acontecimientos que han afectado a la economía ilegal en este país, como el golpe militar durante agosto de 2020, que provocó el derrocamiento del presidente Ibrahim Boubacar Keïta, las redes de clientelismo y las condiciones subyacentes que fomentan numerosas economías ilegales en Mali permanecieron intactas e incluso se fortalecieron (GITOC, 2021:8).

A su vez, la industria criminal del tráfico y contrabando de APAL se complementa, refuerza y en ocasiones depende en gran medida del apoyo o la aquiescencia de funcionarios aduaneros, fuerzas de seguridad y autoridades nacionales ubicadas en los puntos de tránsito por las cuales transcurren las rutas de suministro. Estas acciones pueden verse condicionadas por una variedad de factores: desde motivos económicos (a cambio de una participación en los beneficios) o influidos por el miedo, hasta por una ausencia de voluntad de cambio o una limitada capacidad de intervenir en la actividad. Independientemente de la naturaleza que impide a las autoridades públicas poner la voz de alarma, lo cierto es que la participación directa o indirecta de funcionarios y fuerzas del orden ha resultado esencial en la continuación del lucrativo negocio. En Níger, se ha acusado a funcionarios de vender armas y munición de los arsenales nacionales a grupos extremistas como Boko Haram (Associated Press, 2016), mientras que en Nigeria se ha descubierto que funcionarios de seguridad donan o venden armas a grupos locales implicados en conflictos étnicos (Jesse, 2021). Estas prácticas corruptas están motivadas por los bajos salarios, que incentivan a los funcionarios a participar en el tráfico ilegal de armas para obtener ingresos extras. En consecuencia, son los

particulares, y no el Estado, quienes deciden quién recibe protección y cómo deben resolverse las disputas.

Como comentábamos anteriormente, Libia es un caso particular en cuanto a la corrupción de los funcionarios públicos. En los últimos diez años, individuos que han asumido el manto del poder, ya sea como funcionarios gubernamentales, oficiales aduaneros o trabajadores de empresas públicas han sido capaces de amasar una riqueza extraordinaria por medios ilícitos, capitalizando su autoridad e influencia. La corrupción en Libia no es un asunto menor. El país ocupa el puesto 168 de 198 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional (Transparencia Internacional, n.d.), y la actual situación de seguridad en el país está obstaculizando los esfuerzos para abordar las causas profundas de estas prácticas corruptas. La gran administración pública es una debilidad significativa en el sistema de integridad libio, ya que el sector público emplea entre el 70 y el 85% de la fuerza de trabajo formal en el país y subvenciona productos básicos como alimentos y combustible (UNICRI, 2021:20).

Por último, es necesario poner el foco en el papel que desempeña la propia sociedad civil. La irrupción de una multitud de mercados criminales junto con un contexto proclive a explotarlos son factores que han permitido el crecimiento de la delincuencia organizada y que se ha convertido en una fuente crucial de supervivencia y autodefensa para las comunidades étnicas, los grupos de autodefensa, los ganaderos y otros colectivos de la sociedad civil que se enfrentan a la amenaza constante de la violencia. En este contexto, disponer de un arma de fuego privada se ha convertido en algo esencial, dada la diversificación de la amenaza y el constante recordatorio del patrón del islamismo radical y los conflictos intercomunitarios. Para adquirir armas se recurre al comercio informal y a las redes interconectadas a nivel comunal y tribal. Ejemplo de ello se da en la “cultura del arma” desarrollada en la agrupación de Karamoja, área fronteriza que comparten Sudán del Sur, Etiopía, Kenia y Uganda. Esta zona con escasa presencia gubernamental se ha convertido en un mercado para los traficantes debido a la afluencia de

armas ilícitas, el robo de ganado y la marginación histórica. En ella, agentes estatales (especialmente fuerzas policiales) venden APAL a las comunidades de pastores, que las compran principalmente para utilizarlas contra aquellos que les roban el ganado o para defenderse de los ladrones (Okumu et al., 2023:2).



Figura 4. Pastores turkana armados vigilan su ganado en un abrevadero de Oropoyi, en el distrito noroccidental keniano de Turkana (agrupación de Karamoja). Fuente: Naciones Unidas.

En el ámbito regional, Sudán del Sur y Etiopía actúan como suministradores y Uganda y Kenia como demandantes, teniendo la proliferación de armas en Karamoja un efecto indirecto en otros ámbitos delictivos de la región. El comercio ilícito de armas también se ha convertido en un vector de desarrollo económico, ya que las comunidades locales suelen carecer de fuentes económicas alternativas dentro del sistema legal para satisfacer sus necesidades y garantizar su supervivencia. Sin embargo, la dependencia de la sociedad local de este mercado, al igual que en el comercio ilegal de drogas o recursos naturales, está estrechamente ligada a líderes y élites fuertes que a menudo controlan las redes de tráfico, los intermediarios y las autoridades implicadas, así como las rutas establecidas de entrada y salida del cargamento.

Así, encontramos a una población local que necesita armarse y luchar contra los múltiples desafíos a los que se ven sometidos en un contexto de inestabilidad prolongado. En 2018, se estimaba que los civiles en Níger estaban en posesión de aproximadamente 117.000 armas de fuego, de las cuales solo 2.000 estaban legalmente registradas. Sin embargo, según el proyecto de investigación independiente que rastrea el flujo de armas pequeñas y ligeras Small Arms Survey, Níger es el único país que presenta datos sobre sus armas registradas, ya que Mali (206.000), Burkina Faso (175.000) o Nigeria (6.154.000) no proporcionan datos sobre estas posesiones privadas (Small Arms Survey, 2020). Debido al empeoramiento de la situación de seguridad en Níger, se ha producido un aumento de la demanda de armas, sobre todo de armas pequeñas y munición. El ejército y la gendarmería han confiscado la mayor parte de la munición y las armas, concretamente fusiles de asalto, en la región septentrional de Agadez. Las autoridades parecen tolerar hasta cierto punto la tenencia de fusiles artesanales y de caza, a pesar de su amplia difusión, ya que se han incautado muy pocos (De Tessières, 2018:44). Estas cifras son una muestra de la magnitud de la disposición de armas en el Sahel, aunque no llegan a compararse con aquellas del norte de África. Si tenemos en cuenta una proporción por cada 100 habitantes, Small Arms Survey afirma que el país con más armas en posesión privada es Libia (13.27 armas por cada 100 habitantes), seguido por Marruecos (4.80), Egipto (4.13), Argelia (2.14) y Túnez (1.07).

El contrabando y el tráfico de armas forman parte de un entramado en las que intervienen múltiples actores con intereses y dinámicas diferentes. Entre ellos se encuentran agentes estatales y no estatales, como redes delictivas, funcionarios corruptos y grupos terroristas. Tal y como veremos en el siguiente capítulo, si ampliamos el foco en este último vemos cómo el aprovechamiento de armas por parte del terrorismo cuenta con una heterogénea gama de opciones, socavando los esfuerzos por promover la paz y la estabilidad.

3. Las dinámicas del contrabando y tráfico de armas y su conexión con el terrorismo en la actualidad

Desde la perspectiva de la seguridad, el vínculo entre el crimen organizado y el terrorismo representa un grave desafío. A pesar de que ambos sectores criminales solían considerarse de manera separada en el pasado, con actores, intereses y motivaciones diferentes, cada vez surgen nuevas evidencias que apuntan a la relación entre ambos grupos criminales como un fenómeno conjunto en evolución. Al fin y al cabo, tanto los traficantes y contrabandistas de armas como los grupos terroristas comparten en numerosas ocasiones los mismos espacios y rutas y dependen en gran medida de las armas de fuego para sus actividades, lo que convierte la adquisición de armas en un posible ámbito de cooperación entre estos dos tipos de actores. A pesar de no estar conectados estructuralmente, su interacción es constante para garantizar el dominio de territorios, las rutas de tránsito y la preservación de su cuota de mercado. Para ello, a menudo forjan lazos contrabandistas y tribus locales en una fórmula que suele materializarse en alianzas de conveniencia para controlar las regiones fronterizas y zonas de influencia (ENACT, 2019).

Uno de los principales cambios en la naturaleza de la amenaza ha sido la creciente globalización del terrorismo y el mercado de armas. Los grupos terroristas operan cada vez más en entornos transfronterizos, mientras que los traficantes de armas a menudo pueden trasladar armas entre países con facilidad. Esto dificulta el seguimiento y la interceptación de los envíos de material, así como la desarticulación de las actividades de los grupos violentos. Por otro lado, el aumento de exportaciones de armas -tanto a través de contratos estatales como de entrada ilícita- a África desde la segunda mitad del siglo pasado, en pleno momento descolonizador, ha proporcionado un espacio proclive a acumular estos arsenales para llevar a cabo la lucha armada, tanto a nivel intra-comunal como por parte de los grupos extremistas.

La evolución de la amenaza para la seguridad que supone el nexo entre el tráfico de armas y el terrorismo en el Magreb y el Sahel ha estado determinada por una compleja interacción de dinámicas operacionales y a menudo oportunistas. Con el tiempo, la amenaza ha crecido en alcance y escala, convirtiéndose en una importante preocupación de seguridad para la región y la comunidad internacional.

En el pasado, la amenaza del terrorismo y el tráfico de armas en el norte de África y el Sahel se limitaba en gran medida a conflictos internos y ataques terroristas más o menos aislados. Sin embargo, en los últimos años, la amenaza ha aumentado a medida que grupos terroristas como la coalición JNIM, las ramas territoriales de Daesh en el Sahel Occidental y la cuenca del Lago Chad y Boko Haram se han vuelto más activos en la región. Estos grupos han perpetrado varios atentados de gran repercusión, incluyendo ataques bomba, secuestros, asesinatos y asaltos para interceptar armas y otros recursos. Ejemplo de ello se dio en Nigeria durante 2016, cuando una base militar en Bosso sufrió el ataque de aproximadamente un centenar de militantes de Boko Haram empleando fusiles de asalto, ametralladoras y lanzacohetes RPG-7 con el propósito de robar material logístico y militar (De Tessières, 2018:57).

A la hora de examinar la relación empírica entre ambos fenómenos delictivos, es conveniente identificar las diferentes manifestaciones y motivaciones. Si bien puede darse una relación entre crimen y terrorismo por causas ideológicas, en la mayor parte de los casos de estudio actuales la relación suele ir ligada a un aprovechamiento del crimen organizado como herramienta terrorista para llevar a cabo operaciones y para engrosar las arcas del grupo.

3.1. El mercado criminal de armas como método operacional y financiero del terrorismo

Las armas de fuego son un aspecto indispensable de las tácticas y estrategias operativas de las organizaciones terroristas. Estos activos letales son un factor determinante del éxito, pues contribuyen directa e indirectamente

al crecimiento y expansión de los grupos extremistas. En términos de utilización directa, las armas sirven como herramienta principal para ejecutar atentados. La fácil disponibilidad de armas en países como Libia o los constantes asaltos sobre arsenales malienses o burkineses facilita a los grupos terroristas la obtención de las armas que necesitan para llevar a cabo sus operaciones, ya sea a través del mercado negro, la corrupción o las redes de contrabando. Esto puede dificultar la lucha contra estos grupos por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en estados con instituciones de seguridad endebles, las cuales a menudo se ven superadas en capacidad. Las armas también suelen ser empleadas por parte del terrorismo como instrumento de coerción y sometimiento de posibles reclutas y comunidades locales, lo que provoca que el uso indirecto de las armas de fuego desempeñe un papel importante. La elevada durabilidad de la vida útil de las armas, frente a otros bienes más caducos, es también una cualidad deseable para estas organizaciones violentas, ya que les permite acumular y conservar un arsenal amplio y eficaz que únicamente requiere un buen grado de conservación.

La posesión de armas y su participación indirecta en esta economía criminal se ha convertido en un factor clave para el crecimiento de grupos terroristas como Boko Haram, Daesh y las diversas facciones de la coalición JNIM, vinculada a Al Qaeda. La transferencia de armas pequeñas, incluidos fusiles de asalto, armas antitanque y explosivos, se ha visto facilitada por las redes de contrabando, que han demostrado ser conductos esenciales para la entrega ilícita de armas a los grupos extremistas. En este sentido, el Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU recibió en 2017 múltiples informes de la comunidad tuareg, citando transferencias de armas a Ansar Al Din (perteneciente a JNIM), supuestamente facilitadas por el sitio web de Ansar el Haqq (Panel de Expertos, 2017:51). Un año antes, el mismo Panel informó de que, durante la Operación Barkhane en el norte de Níger, varios individuos que viajaban en un convoy declararon que las armas que transportaban habían sido suministradas por un miembro de la rama Tareq Ibn Ziyad de AQMI, que tenía su base en Ubari (Argelia), y que estaban destinadas al mismo grupo.

Boko Haram, por su parte, ha recurrido en gran medida al contrabando de armas hacia Nigeria, principalmente a través de Camerún y Benín (Odey et al, 2022:389). El grupo también ha reforzado su arsenal mediante el almacenamiento de armas capturadas en asaltos a puestos de control militares y comisarías de policía. ISWAP, la rama del Estado Islámico en África Occidental, y su homólogo en el Sahel Occidental (EI-Sahel), han recurrido igualmente al saqueo de arsenales regionales en Nigeria, Chad y Níger, así como a la incautación de armas de personal muerto en combate (Conflict Armament Research, 2022:8). De hecho, tanto ISWAP como Boko Haram dependen de las redes delictivas de manera muy limitada a la hora de ampliar sus suministros. Mientras que el crimen organizado puede ocultar las armas que obtuvieron ilegalmente para evitar ser procesados, los militantes de ambos movimientos terroristas tienen menos motivación para hacerlo, ya que se enfrentan abiertamente a la autoridad y la legitimidad de los estados a los que atacan. De hecho, poseer armas capturadas en combate a las fuerzas de seguridad del Estado y utilizarlas contra sus enemigos, a menudo las mismas fuerzas del orden, puede apoyar sus ambiciones y mejorar sus estrategias de comunicación (Conflict Armament Research, 2022:55).

Las armas también son un activo valioso para la financiación del terrorismo. Tanto Daesh como Al Qaeda en África han recurrido al secuestro y la extorsión como principales fuentes de ingresos. Estas actividades delictivas implican a menudo el uso de APAL, que permiten a los autores alcanzar sus objetivos y controlar a sus objetivos. Según los informes, la coalición JNIM ha obtenido hasta 40 millones de dólares mediante esta práctica desde su creación en 2017 (Micallef et al, 2019:5). Aunque estos abusos se han dirigido históricamente a turistas y personal extranjero, el aumento de los secuestros y extorsiones locales en países como Burkina Faso ha abierto nuevas oportunidades lucrativas en esta industria criminal (Micallef et al, 2019).

Además de proporcionar a los grupos terroristas los medios para llevar a cabo atentados y secuestros, el tráfico de armas también contribuye a sostener sus operaciones. Los beneficios del tráfico de armas a menudo se han utilizado

para financiar actividades terroristas, como el entrenamiento y el reclutamiento de nuevos miembros, así como para la compra de más armas, explosivos y otros materiales. Esto dificulta la desarticulación de los grupos terroristas, ya que disponen de un flujo constante de financiación que les permite seguir operando.

Las regiones de estudio ofrecen diferencias y similitudes en cuanto al método de financiación del terrorismo. En Oriente Medio, el suministro de munición de Daesh en Irak y Siria proviene del saqueo de arsenales nacionales y fuerzas de seguridad huidas durante sus tiempos de mayor apogeo (2014-2017), aunque las investigaciones en Siria también demuestran una munición presente en posesión del grupo terrorista de reciente fabricación, sugiriendo un suministro adicional de material por parte de otras fuentes previsiblemente destinado a fuerzas opositoras del régimen sirio (Conflict Armament Research, 2017:30). En 2016 se reveló que Daesh había establecido un sistema de producción militar altamente organizado con una junta responsable del desarrollo y la producción de armas, priorizando la cantidad sobre la calidad. Aunque este sistema permitió al grupo oponer una fuerte resistencia a la intervención de la coalición, su capacidad para hacerlo ha disminuido gradualmente. El informe también indica que la mayoría de los materiales utilizados en la producción de armas procedían del mercado turco, lo que pone de relieve la red de adquisiciones de la organización en Turquía y una ruta de suministro directa desde Turquía a la zona de Mosul a través de Siria (Conflict Armament Research, 2016b:8).

En Yemen, Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) coopera con Al Shabaab e individuos asociados en el contrabando de armas (Security Council Report, 2023:13), manteniendo una cartera de ingresos que va desde el robo, incluso a bancos o empresas de cambio, hasta el contrabando de armas y productos petroquímicos y la falsificación de divisas. Lo mismo ocurre con las filiales de Daesh en Yemen y Somalia, que confían en el contrabando de armas y operativos para mantener su flujo de ingresos y luchar por la tibia presencia de la organización en ambos países, a la sombra de Al Qaeda.

Previsiblemente, la Oficina de Al Karrar, ubicada en Somalia, sirve como oficina de distribución del cargamento de armas, al ser uno de los centros financieros más estratégicos para la organización. Según un Estado Miembro que responde al Equipo de Apoyo Analítico y Supervisión de Sanciones de las Naciones Unidas, incluso la rama de Daesh en la Provincia del Khorasan (ISKP o IS-K, por sus siglas en inglés) ha empezado a involucrarse en el contrabando de narcóticos en Afganistán (Security Council Report, 2023:15), previsiblemente heroína y otros derivados del opio, abundantes en el país, lo cual es una novedad si se consideran las pocas evidencias existentes hasta la fecha de la involucración de Daesh en el lucrativo negocio de las drogas en Afganistán. Por su parte, el comando central de la organización liderada por Al Quraishi engrosa la financiación del grupo a través del control de las rutas comerciales y la imposición de peajes a contrabandistas de armas, drogas y migrantes, en un momento donde la presión antiterrorista acorrala las fuentes de financiación del grupo.

Según el mismo informe, el grupo somalí Al Shabaab, afiliado a Al Qaeda, estaría implicado en una red que trafica con armas en Yemen, utilizando embarcaciones para transportar componentes para artefactos explosivos improvisados, munición y armas de fuego desde Yemen a Somalia (Security Council Report, 2023:21). Además, la red incluye a miembros de AQPA, que trafican con minas antivehículo, granadas propulsadas por cohetes, AK-47, ametralladoras y rifles de francotirador equipados con silenciadores y miras telescópicas. Por parte de Daesh, los miembros de su rama en Somalia pasaban armas de contrabando de Yemen a Somalia a través de pequeñas embarcaciones (conocidas como “*dhow*s”), que eran suministradas por intermediarios en Puntland. Al Shabaab es un caso paradigmático del mercado criminal de armas: de hecho, las investigaciones apuntan a que el grupo es precisamente el principal actor detrás del flujo de armas ilícitas a Etiopía y luego al resto de la agrupación de Karamoja, área comentada anteriormente donde comunidades pastoriles, fuerzas de seguridad, líderes de guerra locales e individuos de la sociedad civil participan activamente en el suministro y traslado de armas.

Los conflictos en África y Oriente Medio se encuentran interconectados en el entramado del contrabando de armamento ilícito a nivel internacional. Las numerosas investigaciones sostienen que el saqueo al arsenal libio desde la caída de Gadafi ha permitido desviar armas a los escenarios de conflicto en Irak y Siria, mientras que números de lote coincidentes entre armas de Daesh se han identificado tanto en Irak como en Siria y Yemen. En Siria, las armas y municiones del grupo ya habían sido identificadas en circulación por actores armados de Sudán del Sur suministradas ilícitamente por el gobierno sudanés (Conflict Armament Research, 2017:7). En Yemen, el conflicto en curso ha contado con el apoyo tanto al régimen derrocado como a las fuerzas rebeldes, con países como Arabia Saudí o Irán suministrando armamento a los actores participantes que han terminado, en numerosas ocasiones, en manos de Al Qaeda tanto en Siria como en Yemen (Demuyne et al., 2020:13).

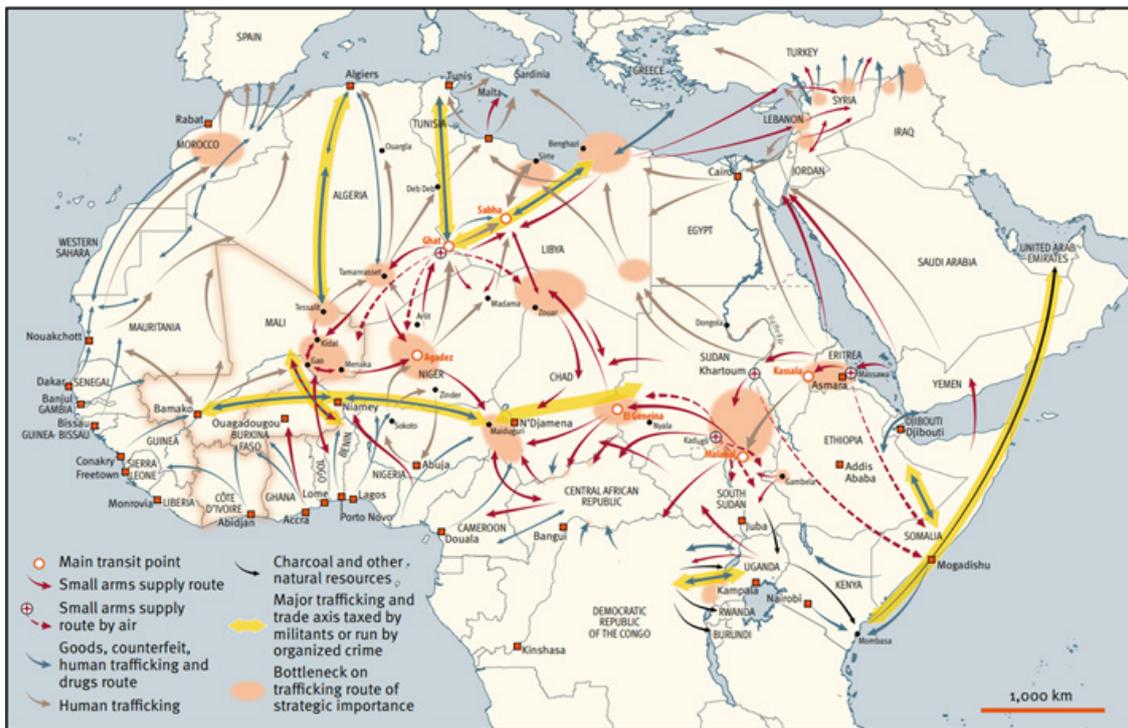


Figura 5. África Occidental y rutas de tráfico transaharianas Fuente: Small Arms Survey (2020). Adaptado de ECFR (2019).

A pesar de no estar conectados de manera estructural, el crimen organizado dedicado al tráfico de armas y el terrorismo “interactúan entre sí para garantizar que todas las partes se beneficien” (Dhaouadi, 2019). Varios

informes resaltan la relación de Mojtar Belmojtar con el crimen organizado dedicado al tráfico de armas, drogas y otros bienes ilícitos (Aguilera, 2022:15; Nellesmann et al., 2015:7). Su vínculo cooperativo suele darse fruto de una alianza de conveniencia, donde los grupos terroristas obtienen grandes cantidades de dinero o recursos de la economía criminal. Sin ir más lejos, en el caso de los intermediarios del tráfico de armas entre Yemen y Somalia, los intermediarios que proporcionan armas tanto a Al Shabaab como a Daesh no cuentan con ninguna lealtad específica a ninguno de los dos grupos, prefiriendo mantener su relación exclusivamente dentro de los límites de los negocios y dejando de lado las motivaciones ideológicas que puedan mantener en el terreno personal.

Los grupos terroristas, a cambio de los recursos financieros y operativos que les proporciona el crimen organizado, se ofrecen como proveedores de servicios de seguridad y control, otorgan permisos de paso y/o personal a cambio de impuestos o peajes gravados a la mercancía que transitan o al servicio prestado, o simplemente permiten que el negocio opere al margen de la actuación terrorista. Esta última práctica es muy frecuente en varios sectores de la economía informal, como el tráfico de cigarrillos y otras drogas, armas e incluso migrantes, proporcionando una ventaja competitiva al terrorismo que les permite convivir y lucrarse indirectamente de un negocio que acumula millones de dólares anuales en la economía sumergida. El uso de armas también sirve como método de uso preferente para la consecución de otro tipo de actividades, como el robo de vehículos o la perpetración de ataques armados. Un informe del Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad en 2012 alertaba de que, según fuentes malienses, este tipo de acciones delictivas habían aumentado en el norte del país como consecuencia de la disponibilidad de armas (Security Council Report, 2012:12).

Por tanto, cuando se analizan las regiones y los métodos de empleo de armas se hace de forma holística, teniendo en cuenta que las transferencias entre unos lugares de conflicto y otros son una práctica habitual en el desvío de armamento procedente de arsenales nacionales, fuerzas abatidas, armas

interceptadas sin autorización destinadas a otros grupos de combate o aquellas de fabricación casera.

3.2. El mercado de armas y su conexión con el terrorismo en el norte de África: el caso de Libia

El norte de África actúa tanto como zona de origen, tránsito y destino de una gran variedad de mercancías y productos de contrabando. Entre ellos destacan productos básicos como combustible, cigarrillos, alcohol o productos farmacéuticos, pero también existe un mercado transfronterizo pujante de armas y drogas.

Se calcula que más de doce millones de armas se encontraban en circulación en el norte de África en 2018, de los cuales dos tercios estaban en posesión de actores no estatales (Demuyne et al., 2020:13). Además de ser sustraídas de los arsenales nacionales de países sucumbidos ante guerras civiles y desestabilización, las armas también se han introducido de contrabando a través de las porosas fronteras desde países vecinos como Túnez y Argelia.

En el norte de África existen diversas fuentes de armas que los grupos insurrectos pueden adquirir. Ejemplo de ello se da con las armas de fuego de conversión (como armas de fogeo o de alarma, de fabricación artesanal), que han viajado desde Turquía a países como Egipto o Libia para que tanto los grupos armados como los civiles las convirtieran a un formato de guerra que mejor se adaptara a sus necesidades (Florquin et al., 2019:58).

De entre todos los procesos históricos y países de estudio que condicionan el actual ecosistema de economías ilícitas en África Occidental, Libia sobresale por su actual condición sociopolítica en el contexto posrevolucionario manifiesto tras las revueltas árabes de 2011. Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi ese mismo año, la antigua colonia italiana se encuentra en un estado de agitación política, con varias facciones armadas que se disputan el control del país. Esto ha creado un entorno propicio para la proliferación de armas tanto

en su territorio como a nivel interregional y en el vecindario más próximo, con países como Túnez, Argelia, Egipto, Mali o Mauritania teniendo que absorber el influjo de armas de fuego, munición y los miles de desplazados por la violencia y el conflicto (Security Council Report, 2012:5).

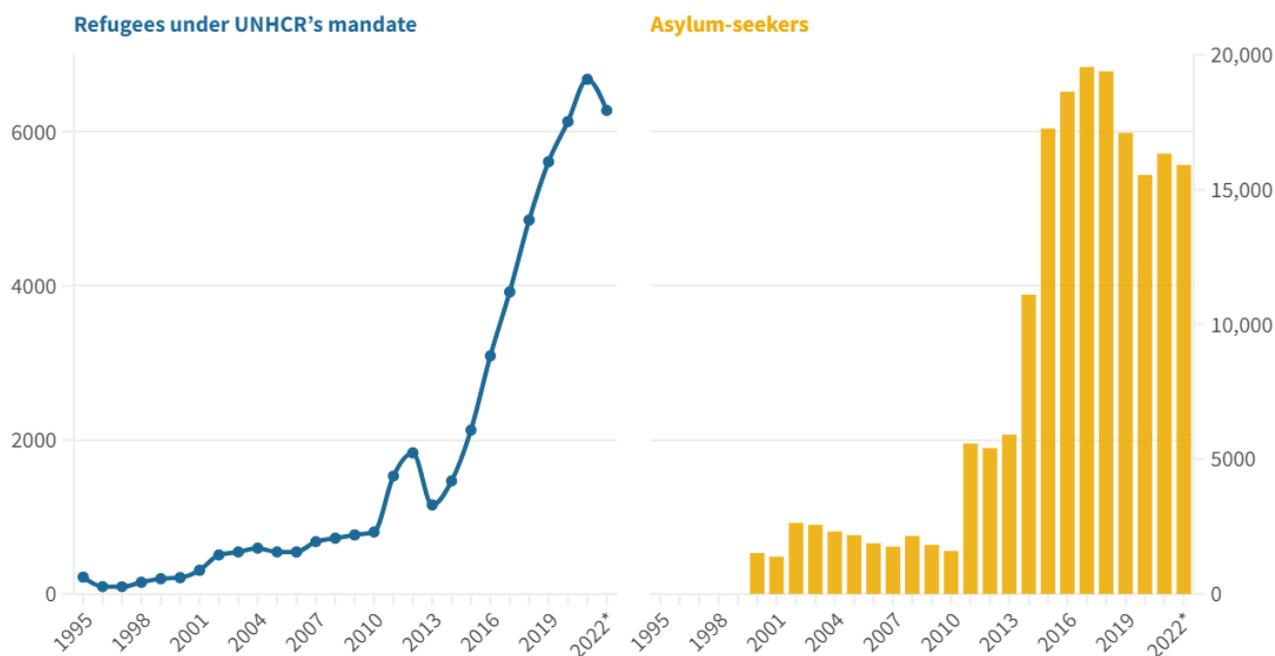


Figura 6. Refugiados y solicitantes de asilo en Libia (1995-2022) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ACNUR.

La ausencia de un gobierno unido y presencia estatal en buena parte del país y los constantes enfrentamientos por el poder entre fuerzas rivales del ecosistema político libio actúan como catalizadores de la economía ilícita como forma de subsistencia en la actualidad, siendo aprovechada tanto por grupos armados como por movimientos insurrectos, funcionarios y gobernantes y el resto de la población civil. La condición geográfica del país en las costas del Mediterráneo Occidental y la facilidad de los grupos criminales para trascender más allá de sus fronteras, además, convierten al país en una zona estratégica de tránsito y destino para los contrabandistas que, como en el caso de las armas, desvían su mercancía hacia el resto del norte de África, el Sahel y otros conflictos en curso en África y Oriente Medio.

En medio de la agitación política y el abandono de las fuerzas de seguridad, junto con el auge de los grupos armados, la ausencia de una autoridad central ha permitido el tráfico de armas y municiones a través de las fronteras de Libia. Estas armas son desviadas de los arsenales de la época de Gadafi, incautadas en el campo de batalla o interceptadas por actores implicados en el conflicto. La inestabilidad resultante en puntos conflictivos como Mali, Sudán y Libia ha creado un corredor económico que alimenta la demanda de armas y munición por parte de grupos rebeldes, hombres de negocio y civiles. El efecto en cadena que el conflicto libio tuvo en las rebeliones tuareg del norte de Mali dinamizó el conflicto en toda la región y reforzó la capacidad operativa criminal desde Mali hasta Sudán del Sur. Según el Small Arms Survey, más de un millón de armas de fuego y ligeras salieron de contrabando de Libia precisamente tras la revolución. A pesar del desvío de la proliferación de armas hacia la propia Libia en los años posteriores a 2014, el Panel de Expertos sobre Libia del Consejo de Seguridad de la ONU concluyó en 2015 que las armas procedentes de Trípoli han reforzado significativamente la capacidad militar de grupos terroristas en países como Argelia, Egipto, Túnez y Mali (Panel de Expertos, 2015:47).

Libia posee, según los registros más actuales disponibles (2018), el mayor número de armas de propiedad privada, con 13.27 por cada 100 habitantes (Small Arms Survey, 2020). El mercado de armas es un negocio lucrativo para quien hace negocios ilícitos en el país. Según las investigaciones, el precio de un AK-47 en Libia suele oscilar entre 150 y 1.000 dólares, e incluso más, frente a una media en todo el continente africano de 500 dólares (Nellemann et al., 2015:3). Si entramos en tipos de armas más avanzadas, como los sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPADS) o los misiles tierra-aire SA-7, estas pueden llegar a ascender a decenas de miles de dólares cada una. Las cifras muestran el valor destinado al comercio de armas en el país, estimado entre cuatro y quince millones de dólares anuales para las armas ligeras. Si se incluye la munición, los ingresos totales del comercio de armas en el país -según la información que se dispone sobre la compra-venta de armamento- se sitúan entre los 15 y los 30 millones de dólares, aunque el valor real podría

incluso duplicarse si contamos con el número de armas que se trafican en el mercado negro.

Si tenemos en cuenta los niveles de arsenal de armas previos al punto álgido de inflexión histórica materializado en las revueltas del mundo árabe de 2011, vemos cómo los arsenales libios albergaban entre 250.000 y 700.000 armas, de las que se calculaba que el 75% eran fusiles de asalto (Nellemann et al., 2015:3). Con el colapso del régimen de Gadafi y la desintegración del Estado, grupos armados y redes de tráfico desvalijaron buena parte de este arsenal, en ocasiones con el beneplácito y el apoyo activo de los funcionarios estatales, completando así un gran ciclo de negocio con poca resistencia por parte de las autoridades.

La capacidad armamentística bajo el régimen de Gadafi trascendía las fronteras libias. La Oficina de la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés) confía en datos que sugieren que el país poseía, durante los años de poder del presidente libio, 22.000 MANPADS, de los cuales 5.000 fueron asegurados en el país, mientras que los otros 17.000 se encuentran en paradero desconocido. Del resto, sólo 43 MANPADS fueron incautados, todos ellos en Argelia. La agencia de la ONU termina por sugerir que unos 400 MANPADS podrían haber sido objeto de tráfico, alrededor del 2,5% de todo el suministro de arsenal libio de este tipo de armamento (UNODC, 2013:37).

En el periodo previo a 2011, Libia fue una fuente importante de armas pequeñas y ligeras para diversos grupos armados de la región, y Gadafi consideraba la adquisición de armas una prioridad estratégica para el país. Gastó miles de millones de dólares en la compra de armas, principalmente a la antigua Unión Soviética (y ahora a Rusia) y, en menor medida, a Francia e Italia. Gadafi se veía a sí mismo como una figura destacada en la lucha contra el imperialismo occidental en Oriente Medio y África y utilizó su enorme riqueza petrolera para comprar armas en el extranjero y financiar grupos armados alineados con su visión panarabista de la política exterior e interior libia (Aguilera, 2023).

La caída del régimen de Gadafi dejó tras de sí una situación caótica, que permitió a los grupos armados saquear bases militares y depósitos de armas, lo que dio lugar a la proliferación del contrabando y la venta de armas en todo el continente. En 2011, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estimó que las fuerzas armadas libias contaban con 76.000 efectivos en activo y 40.000 en la reserva (UNODC, 2013:37). Partiendo de los países con una situación similar, la proporción que estimaba la UNODC era de entre dos y seis armas de fuego por soldado. Esto sugeriría entre 250.000 y 700.000 armas de fuego, de las cuales (basándose en la composición típica de los arsenales) es probable que entre el 70% y el 80% fueran fusiles de asalto. Si la proporción entre soldados y armas era de cuatro por soldado, deberían haber algo más de 450.000 armas de fuego en el arsenal libio del régimen de Gadafi. Aplicando una tasa de tráfico del 2,5%, se podría haber traficado con unas 12.000 armas, de las cuales unas 9.000 pertenecerían a fusiles de asalto. Al ser de una preocupación menor los fusiles de asalto que los MANPADS, la tasa de interceptación (siempre según la UNODC) podría ser menor y, en consecuencia, el número de armas podría haber duplicado o triplicado esta cifra, por lo que el organismo estimaba una cifra cercana a las decenas de miles de fusiles de asalto disponibles en el mercado ilegal de armas (UNODC, 2013:37).

Una de las principales fuentes de venta de armas es el mercado negro, donde se pueden comprar a funcionarios corruptos o a organizaciones criminales. De todos los países comprendidos en el norte de África, Libia destaca por la irrupción del mercado negro de armas de fuego tras el colapso del régimen en 2011. En la época de Gadafi, el dictador se sentía cómodo controlando el flujo y tráfico de armas en Libia, por lo que su caída abrió nuevas oportunidades para las redes criminales y transformó al país en uno de los nudos centrales del contrabando y la venta de armamento y otros flujos ilícitos, como las drogas o los migrantes. Las armas de fuego se encuentran de una manera tan disponible que pueden incluso disponerse de manera online, a través de las redes sociales, lo cual simula ser un “bazar de armas” a disposición de civiles, actores armados y, por supuesto, organizaciones terroristas (Demuyne et al., 2020:11).

Desde mayo de 2014, la violencia entre facciones en Libia se intensificó hasta convertirse en una segunda guerra civil, debilitando aún más el ya fragmentado control territorial y militar. Junto con la división principal entre las fuerzas alineadas con el general Jalifa Haftar y la Cámara de Representantes con sede en Tobruk, y las que apoyaban al rival Congreso Nacional General en Trípoli, varias milicias étnicas e islamistas con diversos grados de autonomía han seguido dominando gran parte del sur y suroeste de Libia. Estos grupos actualmente están todavía activos en zonas como Sebha y Ubari, que anteriormente fueron bastiones del antiguo dirigente libio y, por tanto, importantes lugares de almacenamiento de armas nacionales antes de 2011.

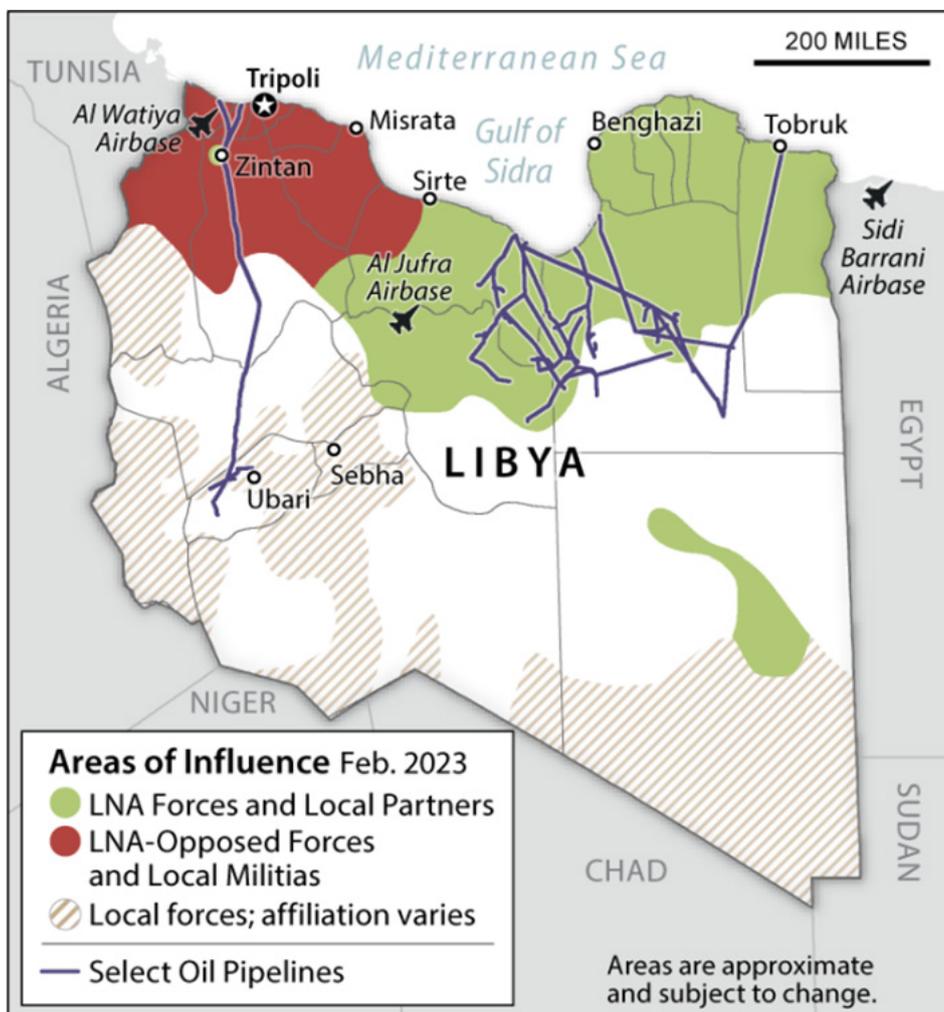


Figura 7. Libia: Áreas de influencia y cronología. Fuente: Congressional Research Service in Focus report, Libya and U.S. Policy (2023)

El movimiento de combatientes extranjeros hacia y desde Libia también dio lugar a la transferencia de armas a gran escala, tanto a través de canales comerciales como de medios patrocinados por el Estado. La migración de combatientes tuareg, que en su día formaron parte de la Legión Islámica y el Ejército Libio de Gadafi, a Mali y Níger en 2011, y la afluencia de combatientes extranjeros leales a las fuerzas de Daesh en Sirte desde 2014, han contribuido a esta proliferación transfronteriza entre actores rebeldes. A pesar del establecimiento de embargos, sanciones, misiones internacionales y grupos de trabajo destinados a combatir la rápida disponibilidad de armas libias, este mercado negro sigue floreciendo, y los esfuerzos por frenar el flujo de armas ilegales han sido todo un reto.

El tráfico y contrabando de APAL a escala regional ha tenido un impacto significativo en la reconfiguración de la delincuencia organizada. Durante el régimen de Gadafi, esta dependía en gran medida de las redes delictivas bajo el poder del dirigente libio para su propia supervivencia y expansión. Tras la revolución, el colapso de la estructura estatal y la proliferación de grupos armados crearon un vacío de poder que permitió a estas redes prosperar y ampliar sus operaciones. En la actualidad, en lugar de depender de un régimen corrupto bajo un único líder, estas redes criminales han evolucionado hacia una estructura compleja que incluye funcionarios, líderes de milicias, empresarios y señores de la guerra. Todos ellos se han convertido en actores destacados del conflicto en curso, proporcionando financiación, logística y recursos humanos a las facciones beligerantes, al tiempo que se benefician de su propio enriquecimiento.

El panorama de la delincuencia organizada en Libia es diverso, con varios grupos de milicias que dominan diferentes mercados delictivos y ejercen un mayor control sobre regiones concretas del país que las propias facciones políticas. Sin embargo, en comparación con los grupos de delincuencia organizada de otras partes del mundo, los grupos libios carecen del mismo nivel de sofisticación y organización (Global Organized Crime Index, n.d.). Además de las milicias, en Libia también operan empresarios vinculados al

negocio de las armas. Estas familias individuales con afiliaciones políticas utilizan estructuras casi corporativas para importar y exportar los bienes. De hecho, la afluencia de armas de estados extranjeros a las facciones libias crea nuevas oportunidades para que las redes delictivas se asienten sin mucha resistencia a lo largo del país, aunque la sólida estructura estatal ha impedido a actores extranjeros dominar estas economías criminales.

La delincuencia organizada asentada en Libia a través de milicias y empresarios suele estar estrechamente vinculada a la clase política, y los grupos milicianos y los actores criminales ejercen una influencia sustancial en los procesos de desarrollo social y político. De hecho, esta interdependencia ha creado una situación en la que el proceso político depende indirectamente de los beneficios del crimen organizado (Global Organized Crime Index, n.d.). Por su parte, las redes criminales locales han buscado desarrollar un control más exhaustivo de las armas para llevar a cabo sus actividades ilegales, como el contrabando de personas, el tráfico de drogas y la minería ilegal, y establecer así una réplica de las estructuras de poder tradicionales sobre un determinado territorio que desafíe la autoridad de un eventual Estado unificado, temiendo la pérdida del nicho de negocio disponible ahora en la industria criminal.

Además de los privilegios políticos, Libia se ha convertido en un punto de tránsito para los traficantes de armas debido a sus vastas fronteras desérticas y a la debilidad de sus infraestructuras de seguridad, lo que atrae a los contrabandistas para trasladar sus mercancías sin ser detectados. Los traficantes de armas han utilizado las fronteras meridionales de Libia para transportar armas a países vecinos como Chad, Mali y Níger (Aguilera, 2022; Micallef et al, 2019; Strazzari y Zampagni, 2018). La inestabilidad política de Libia y la falta de una gobernanza eficaz, por último, también han permitido a los grupos terroristas utilizar al país como base de operaciones y beneficiarse del tráfico de armas. Sin ir más lejos, Daesh aprovechó el caos político y el vacío de seguridad de Libia para establecer, en 2014, su capital *de facto* en la ciudad costera de Sirte⁷, por lo que el caos político termina siendo un beneficio sustancial para una buena parte de actores interesados en el conflicto.

7 Sirte fue considerada la tercera capital del califato, solo por detrás de Raqqa y Mosul.

No se debe infravalorar el papel desestabilizador de Libia en las economías ilícitas y las redes terroristas transaharianas. Las enormes cantidades de armamento de Libia, combinadas con su débil infraestructura de seguridad y su inestabilidad política, han creado un entorno fértil para que prosperen los contrabandistas de armas y el extremismo violento. La anteriormente mencionada oleada migratoria de combatientes tuareg y extranjera hacia Mali y Níger tras la revolución contribuyeron precisamente al desvío y proliferación de armas. A su vez fomentaron la insurgencia tuareg e islamista en Mali en 2012, la adquisición de sistemas de armamento como armas pequeñas y MANPADS por parte de actores armados en toda la región del Sahel, y el suministro de material a grupos armados en las primeras fases de la revolución siria.

Las autoridades tunecinas llegaron a confirmar, en 2015, que “la mayor parte del material militar utilizado en actividades terroristas procedía de Libia” (Panel de Expertos, 2015:48). A pesar de estos alarmantes acontecimientos, algunos países han logrado frenar el flujo de armas a través de sus fronteras. Níger, por ejemplo, logró incautar armas, municiones y explosivos sospechosos de proceder de arsenales libios en manos de combatientes retornados, traficantes de armas y terroristas de la rama territorial de Al Qaeda en el norte de África, lo que pone aún más de relieve la adquisición de armamento procedente de arsenales libios por parte del grupo terrorista. Por el contrario, el gobierno de Bámako informó de la apertura de un canal de diálogo con los combatientes que regresaban, principalmente tuaregs malienses, animándoles a entregar sus armas voluntariamente (Informe del Consejo de Seguridad, 2012:10). La insuficiencia de los mecanismos para contener la creciente amenaza de la delincuencia organizada y el terrorismo desde el conflicto libio sigue siendo evidente en algunos países.

Si bien es cierto que la demanda de armas en Libia ha desviado parte de su suministro de vuelta al país desde 2014, la proliferación de armas de fuego ha tenido un efecto devastador en la seguridad de África Occidental en los últimos años (Micallef et al., 2019). Organizaciones extremistas, como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Ansar Al Din y Boko Haram, han aprovechado la

disponibilidad de este recurso en la zona, utilizándolo para perpetrar ataques contra civiles, objetivos militares y fuerzas internacionales. El uso de estas armas frente a alternativas menos letales ha aumentado el número de víctimas en la región, lo que ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, según datos del Observatorio de Desplazados Internos (IDMC, 2022). Por ello, es necesario poner el foco en cómo los procesos históricos del norte de África han impactado en su vecindario más próximo, siendo el Sahel el epicentro de la violencia y el conflicto derivados de la crisis política libia de 2011.

3.3. El mercado de armas y su conexión con el terrorismo en el Sahel

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la crisis libia agravó todavía más la ya precaria situación de seguridad en el Sahel. A pesar del control fronterizo, se llegaron a introducir de contrabando en varios países al sur del Magreb grandes cantidades de armas y munición procedentes de los arsenales libios, especialmente granadas propulsadas por cohetes, ametralladoras con visores antiaéreos, fusiles automáticos, munición, explosivos y artillería antiaérea ligera montada en vehículos (Security Council Report, 2012:10). También denunciaron las autoridades gubernamentales consultadas que misiles tierra-aire y MANPADS, aunque sin pruebas de su existencia, también fueron introducidos, lo cual sería confirmado años más tarde tal y como apunta la anterior sección de este estudio.

Aunque los flujos de armas ilícitas en el Sahel no proceden exclusivamente de fuentes libias desde 2011, el perfil de las armas ilícitas en la región refleja las consecuencias de otras crisis estatales, en particular en Mali, y el escaso control de los arsenales nacionales en países vecinos como Costa de Marfil. En la actualidad, se calcula que entre 10.000 y 20.000 armas procedentes de Libia han llegado a este vecindario más próximo y frágil en términos de presencia estatal transfronteriza, incluyendo Mali, Níger, Chad y Sudán. Según otras estimaciones, esta cifra es mucho mayor, posiblemente multiplicada por cuatro, debido a la desintegración del ejército y las instituciones estatales libias. Hay

evidencias que respaldan el papel fundamental que desempeñaron las armas y las milicias procedentes de Libia en el desencadenamiento del movimiento separatista en Mali en 2011, y que ha seguido alimentando la inestabilidad, incluidos los ataques contra el personal de la ONU y otros objetivos. Además, el control y el acceso a las armas en la zona transahariana se ha convertido en un factor crítico para la capacidad de controlar las rutas comerciales y establecer el control territorial.

Aunque siguen proliferando las armas procedentes de Libia, su flujo ha disminuido sustancialmente desde 2014. Esta reducción puede deberse a la mejora de los esfuerzos de interdicción en las rutas de tránsito tradicionales, especialmente en Chad y a lo largo de las fronteras de un lado en Nigeria y de otro en Argelia. Sin embargo, la demanda interna de armas en Libia ha aumentado debido a la intensificación de los conflictos comunales entre dominios políticos rivales, por lo que explica significativamente que las armas se redirijan de vuelta al interior del país.

Además del historial de artefactos que han estado circulando durante décadas, los grupos armados islamistas en el sur del Sahel han estado utilizando otro tipo de conjunto de armas. Tal y como se ha señalado anteriormente, en 2015-2016 grupos afiliados a Al Qaeda llevaron a cabo varios ataques de alto perfil contra hoteles internacionales y objetivos de seguridad nacional en el sur del Sahel, utilizando un alijo común de armas pequeñas que difería de las documentadas anteriormente en la subregión. Entre ellas había fusiles de asalto de origen iraquí y un lote de fusiles chinos fabricados en 2011 cuyos números de serie coinciden con los de los fusiles incautados a combatientes de Daesh por las Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo), milicia kurda de autodefensa bajo las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en 2015. Esto sugería, y así se ha mencionado anteriormente, que los grupos islamistas responsables de los atentados del Sahel Occidental pueden tener una fuente de suministro común o constituir una célula única, e indican un posible vínculo entre las fuentes de suministro de los combatientes islamistas en África Occidental y aquellos que operan en Irak y Siria.

También se ha señalado anteriormente que grupos terroristas como Daesh y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) han aprovechado la situación en Libia para establecerse en el país y adquirir armas, pudiendo pasar armas de contrabando a través de la frontera para apoyar sus actividades en los países vecinos de Mali, Níger y Túnez. Por su parte, la franquicia de Daesh en Libia mantiene un perfil resiliente que le permite aprovecharse del conflicto actual. Con un declive económico agudizado en el sur del país, mantiene vínculos cooperativos con elementos tribales involucrados en el contrabando ilícito de armas, el cual sirve como fuente de financiación para el grupo (Security Council Report, 2023:10).

El Sahel y su periferia constituye el principal teatro de operaciones de organizaciones extremistas violentas como la coalición JNIM, afiliada a Al Qaeda, la franquicia regional de Daesh en el Sahel Occidental -renombrada en 2022 como Estado Islámico en el Sahel o EI-Sahel- y grupos locales como Boko Haram en Nigeria y alrededores. Estos grupos socavan constantemente toda operación militar en curso que pueda darse para combatir la insurgencia armada, especialmente en la zona más afectada de la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso. La ambición expansiva de poder y territorio por parte de estos grupos hace que la amenaza se traslade a un entorno cada vez mayor. En la subregión saheliana de la cuenca del Lago Chad, la rama de Daesh en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) y Boko Haram compiten por su liderazgo, cuestionando la eficacia de las medidas de seguridad implementadas a nivel nacional e internacional.

Las regiones fronterizas transaharianas, especialmente aquellas ubicadas entre Mali, Níger y Burkina Faso, se enfrentan a un importante riesgo de violencia relacionada con el tráfico y el contrabando de armas debido a la estructura informal que impera en las comunidades de estas zonas. Los ciudadanos optan, en estos casos, por armarse y protegerse de aquellos que buscan invadir sus tierras de cultivo y pastoreo, práctica habitual no solo de grupos extremistas sino también de otras comunidades locales o incluso de las fuerzas de seguridad. Además de la lucha por sus recursos, a menudo

tienen que hacer frente también a los propios grupos armados que les obligan a engrosar sus filas, o a modo de autodefensa en caso de la negativa de estos a unirse a la lucha armada. Sin embargo, el tráfico ilícito de armas también sirve a la población local como vector de desarrollo económico, al no disponer en muchas ocasiones de fuentes económicas alternativas dentro del propio sistema legal que permita satisfacer sus necesidades y garantizar su supervivencia y la de sus familias. En el caso del mercado de armas, así como en el negocio de otros bienes ilícitos como la droga o la extracción ilegal de los recursos naturales, la sociedad local depende intensamente de los líderes y élites de referencia, los cuales a menudo controlan las redes de tráfico de la mercancía, los intermediarios y autoridades involucradas, así como las rutas establecidas de entrada y salida del cargamento.

Las fuentes de origen de las armas en el Sahel

Con motivo de clarificar las diferentes fuentes de origen de armas a disposición de los grupos armados, se han clasificado en tres categorías principales: de origen nacional, regional e internacional.

A nivel nacional, en los propios países del Sahel existen varias fuentes de armas a disposición de grupos terroristas y otros actores armados. Una de las principales fuentes es el mercado negro, donde se pueden comprar armas a funcionarios corruptos u organizaciones criminales. En Mali, el mercado de armas es en gran medida informal, y las armas circulan a través de una red de vendedores, intermediarios y traficantes. Además, los grupos terroristas también pueden adquirir armas mediante robos o asaltando arsenales militares o policiales, práctica habitual en Mali, Níger, Burkina Faso y Nigeria. A esto hay que sumarle el hecho de que algunos arsenales nacionales no cuentan con la infraestructura, los recursos o la financiación adecuados para gestionar un volumen significativo de armas. Las armas incautadas a través de operaciones policiales a menudo no se destruyen o desactivan al momento, o se rastrean y marcan para su uso por parte de las fuerzas estatales de acuerdo con las prácticas establecidas a nivel internacional sobre el manejo de armas ilícitas

(Jesse, 2021). Tampoco existe la capacidad, en algunas otras ocasiones, de almacenar un gran volumen de armamento incautado, lo cual termina por limitar la capacidad estatal de gestionar sus propios arsenales y el armamento confiscado en las operaciones.

El entorno regional transahariano es una de las rutas tradicionales del contrabando y tráfico de armamento con ramificaciones en grupos extremistas violentos en el Sahel. De hecho, Libia fue identificada como la principal fuente de material para los grupos terroristas en Mali en 2014, los cuales a menudo envían miembros al Estado costero con listas de compra de materiales y dependen en gran medida de las redes de tráfico criminal para reponer sus arsenales. Además del entorno internacional, la coalición JNIM, por su parte, ha usado a Libia como uno de sus principales suministradores de armas y munición. De acuerdo a las investigaciones, las principales rutas de tráfico ilícito de armas procedentes de Libia transcurren desde Al Uwaynat y Murzuq hacia Gardel (Argelia), el Paso del Salvador (frontera con Níger) y Tomou (Níger), con nudos comerciales en Azaghan (Argelia), Tchibarakaten, Seguedine y Tassara (Mangan y Nowak, 2019:6). Desde Tamanrasset (Argelia), las principales rutas de tráfico ilícito de armas de fuego cruzan la frontera maliense hasta los núcleos de tráfico en In-Afarak e In Khalil para encontrar su siguiente destino en la ciudad de Timbuktú. Este núcleo urbano ejerce como gran espacio de interconexión con el tráfico de armas, exportando la mercancía recibida hacia la ruta que va desde Guinea hacia la ciudad de Gao, así como operando en el centro del tráfico intra-maliense.

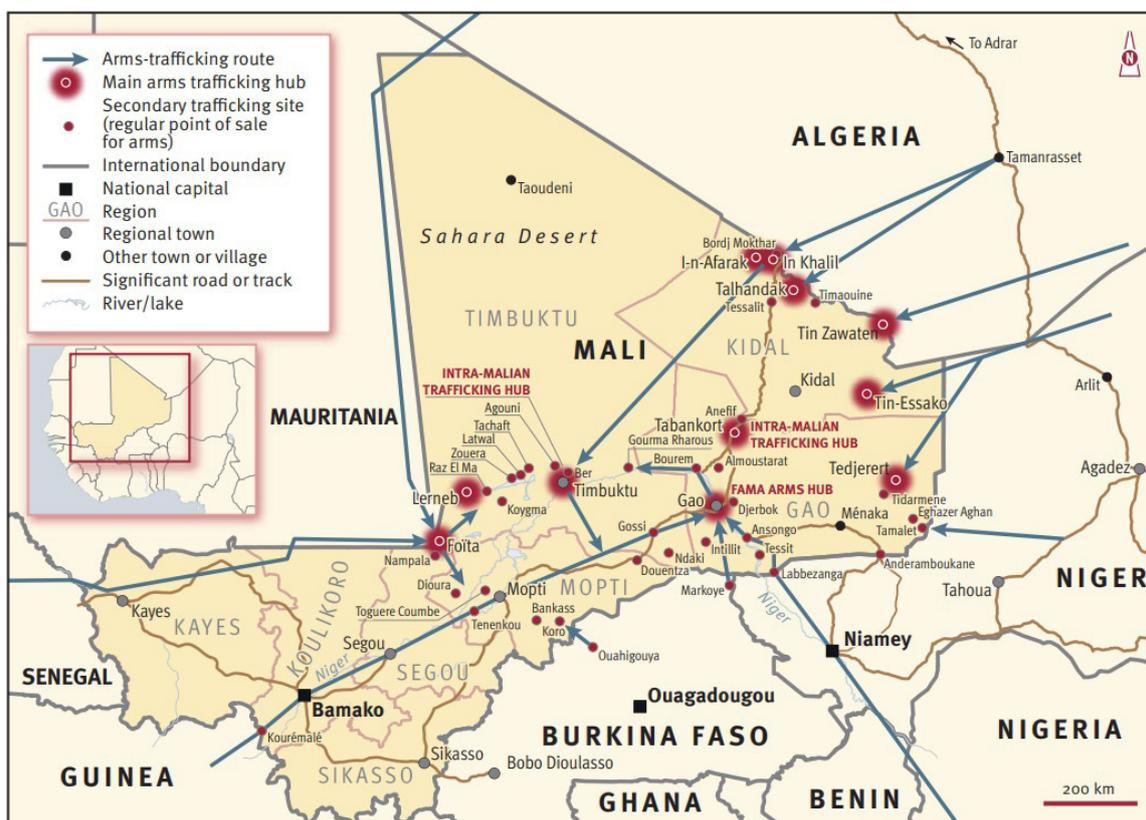


Figura 8. Rutas del tráfico ilícito de armas en Mali y a través de Mali. Fuente: Pellerin (2018), Mangan y Nowak (2019).

Tras el colapso del régimen en Libia, algunas autoridades indicaron que multitud de tipos de armas habían sido introducidas de contrabando en países como Mali por repatriados, especialmente por parte de antiguos combatientes del ejército regular libio o mercenarios durante el conflicto. Representantes del entonces Gobierno maliense informaron de un canal de diálogo con los retornados, principalmente tuaregs malienses, animándoles a entregar sus armas de manera voluntaria, mientras que advertían de un aumento del comercio de armas en la región de África Occidental (Security Council Report, 2012:10).

A pesar de ello, algunos países consiguieron repeler el intento de desvío de armas dentro de sus territorios. Es el caso de Níger, donde el refuerzo de sus fuerzas militares en el norte del país y la operación Barkhane han dificultado las operaciones de los traficantes, provocando que el contrabando de armas desde Libia haya disminuido desde 2013. Los traficantes han adaptado sus

métodos, virando entre Níger y Argelia, reduciendo el tamaño de sus convoyes y almacenando material en alijos temporales en zonas remotas hasta que haya oportunidad de trasladarlo.

El ejército de Níger ha conseguido incautar armas, munición y explosivos sospechosos de proceder de arsenales libios a manos de combatientes retornados, traficantes de armas y terroristas de Al Qaeda en el Magreb Islámico. En el caso de este último, la incautación de un convoy que transportaba 645 kg de explosivos y 445 detonadores por las autoridades de Níger alertaron que tenían como destino final el campo de AQMI en el norte de Mali, demostrando que el grupo terrorista había estado adquiriendo armamento de los arsenales libios.

En octubre de 2015, el Panel de Expertos de la ONU realizó una visita a Níger y obtuvo información sobre las actividades de grupos armados y redes de tráfico entre Libia y Mali/Níger. A través de transcripciones de interrogatorios de personas detenidas en convoyes en el norte de Níger en 2014 y 2015, se reveló que varios grupos, entre ellos AQMI, Ansar Al Din, el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), MUJAO y Al Murabitún, recibían apoyo activo de Libia. Este soporte se prestaba bien a través de miembros de los grupos residentes en Libia, bien mediante vínculos temporales y visitas destinadas a obtener fondos, armas y otros medios logísticos (Panel de Expertos, 2016:43).

A pesar de la disminución de la actividad de tráfico a través de Níger en 2013 y 2014 como resultado de las operaciones Serval y Barkhane, todavía hay varios convoyes que transportaban material a grupos armados en Mali, no solo AQMI sino también a MUJAO y Ansar Al Din. El material incautado ha incluido diversos tipos de armamento, como fusiles de asalto, ametralladoras de uso general, lanzagranadas propulsados por cohetes, lanzadores de mortero y munición relacionada, así como un pequeño número de MANPADS (Panel de Expertos, 2015:134). La munición para sistemas de armamento pesado incautada estaba probablemente destinada a su uso inmediato en artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) o a su posterior tráfico,

ya que no se encontraron los propios sistemas (De TESSIÈRES, 2018:45), indicando una conexión entre el tráfico de armas y el uso de IEDs por parte de los grupos terroristas de la región. Además, las similitudes en el uso de artefactos explosivos improvisados entre Libia y Mali sugieren una transferencia de conocimientos entre los grupos terroristas de estos dos países.

Tomando como variable aquellos países experimentando un mayor volumen de actividad terrorista, principalmente perpetrada por movimientos afiliados a Al Qaeda y Daesh, pero también por parte de grupos locales, Níger y Nigeria sobresalen como dos de los estados con mayores cantidades de armas, munición y material relacionado desviados de arsenales convencionales⁸.

Los grupos terroristas operativos en Níger han ido adquiriendo armas y municiones de diversas fuentes, principalmente provenientes de los arsenales nacionales del país o en su defecto de la región. En concreto, los arsenales de los grupos armados malienses operativos en el país nigerino consisten en gran medida en armas saqueadas de los arsenales nacionales malienses y libios durante la crisis de 2012, así como de otras fuentes menores. Parte de este material, según las investigaciones, había sido transferido previamente al Gobierno maliense por China y Bulgaria antes de la crisis y probablemente formaba parte de los arsenales nacionales saqueados en el norte de Mali en 2012. Se han documentado varios lotes de munición de los arsenales nigerinos en Mali en los últimos años, lo que indica que se han producido tales desvíos. Aunque algunos oficiales corruptos han podido estar implicados en los desvíos de material gubernamental, los ataques a posiciones de seguridad en Níger por parte de grupos procedentes de Mali también han dado lugar al robo de armas y vehículos (De TESSIÈRES, 2018:55).

Los métodos de adquisición de los grupos afiliados a ISWAP y Boko Haram son de naturaleza oportunista y aprovechan diversas fuentes de material militar, principalmente mediante capturas en el campo de batalla y

8 Un equipo de trabajo del centro de investigación británico Conflict Armament Research fue enviado a las zonas de estudio con el objetivo de establecer una base de datos cuantitativa sobre los desvíos de armas y munición en Europa, Asia y África. Como resultado se creó la plataforma iTrace, financiada por la Unión Europea y el gobierno alemán, de la cual el presente estudio está extrayendo buena parte de sus datos.

asaltos a las fuerzas armadas en la región fronteriza del lago Chad. Según muestran las evidencias, ambos movimientos han conseguido apropiarse de material suministrado originalmente a Níger y Nigeria, pero también en Chad, armamento que estos gobiernos probablemente obtuvieron para combatir a estos mismos grupos insurgentes. Las recientes incautaciones de armas y municiones fabricadas y desviadas a ambos grupos indican que los estados de la región tienen una capacidad limitada para asegurar su propio material militar, especialmente en las zonas de conflicto remotas, donde las amenazas son más importantes (Conflict Armament Research, 2022:61).

Poniendo el foco en el papel de la rama de Daesh en la provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés), vemos cómo es habitual el saqueo de depósitos de armas de las fuerzas de seguridad en puestos de control y otros espacios militares. La mayoría de las armas recuperadas en el sureste de Níger, principalmente fusiles de asalto y en menor medida ametralladoras, lanzacohetes, lanzagranadas, pistolas, escopetas y morteros, procedían de 21 países, más de la mitad de China, Rusia y Polonia. También se encontró munición de calibre OTAN en más del 90% de los cartuchos de la muestra incautada, lo que indica que los militantes afiliados a ISWAP probablemente capturaron el material de una o más unidades militares desplegadas en la región (Conflict Armament Research, 2022:15). A pesar de no depender en gran medida de una red de contrabando de armas más allá de su zona de influencia, sí se ha considerado la posibilidad de que compartan ciertos canales de suministro con otros grupos armados transregionales, al encontrar a militantes locales en posesión de fusiles de asalto pertenecientes a la misma serie de producción o que presentaban pruebas de manipulación similares a las de los fusiles utilizados por grupos más lejanos. Si bien apunta a cierto grado de interconexión entre estos grupos y capacidad de suministro, no se puede verificar mediante técnicas de fuentes abiertas que los afiliados de ISWAP en torno al lago Chad dependan realmente de mecanismos de adquisición internacionales directos para su propio abastecimiento (Conflict Armament Research, 2022:62). En su lugar, la opción más lógica parece seguir siendo el saqueo y asalto a depósitos nacionales en las zonas donde opera.



Figura 9. Imagen de un vehículo militar dañado en la ciudad nororiental de Gudumbali (Nigeria), tras un ataque de miembros de ISWAP, el 11 de septiembre de 2018. Fuente: Kolawole Adewale/ Reuters/Council on Foreign Relations.

Al analizar a su principal rival, Boko Haram, vemos cómo en el sur de Níger, las incautaciones y operaciones realizadas por las fuerzas nigerinas a sus militantes proporcionan información crucial sobre el tipo, volumen y ubicación de las armas y municiones utilizadas por el grupo. Estas se guardan, según las investigaciones, en un lugar central de la zona militar de Diffa, y el material incautado en esta región es retenido por unidades móviles o se lo llevan tropas extranjeras, como soldados chadianos, para su propio uso. El ejército también reintegra a sus arsenales el material que se cree desviado de sus depósitos (De Tessières, 2018:55). El grupo terrorista ha adquirido material de los depósitos de armas de Níger y Nigeria, principalmente mediante ataques a puestos de seguridad o empleando a oficiales corruptos. En el primer caso, los asaltos a arsenales constituyen una de las principales formas en que Boko Haram alimenta sus capacidades de combate. El grupo ataca instalaciones militares o policiales donde se almacenan armas y municiones, contando a menudo con la ayuda de información privilegiada de oficiales y funcionarios, que pueden

proporcionar datos sobre la ubicación y la seguridad de las instalaciones de almacenamiento. Uno de los ejemplos más destacables se dio en junio de 2016, cuando Boko Haram atacó la base militar de Bosso (Diffa), que contenía varios depósitos con una importante cantidad de material logístico y militar. Durante el ataque murieron treinta y dos miembros de las fuerzas de seguridad, invadiendo temporalmente la ciudad y apropiándose del suculento botín de armamento y munición.



Figura 10. Un cartel en Bosso en el que se puede leer “No hay futuro para Boko Haram, larga vida a Níger” en 2015. Fuente: Sky News.

En cuanto a los oficiales corruptos, algunos cargos nigerinos han sido acusados de vender material de los arsenales nacionales a miembros de Boko Haram, al igual que en Nigeria. En 2013, por ejemplo, un alto oficial de seguridad de la región de Diffa robó y vendió fusiles de asalto tipo 56-1 de producción china recién adquiridos, tras haber cincelado el número de serie. Reclutó a tres oficiales de otras fuerzas que le suministraron fusiles y munición, prometiéndoles una parte de los beneficios. Los agentes fueron procesados y el delito fue juzgado como un acto terrorista (De Tessières, 2018:55). La venta de armas y munición

de los arsenales nacionales directamente a los miembros de Boko Haram por parte de servidores públicos no solo proporciona un suministro constante de armas al grupo, algo que buscan constantemente por su escaso stock, sino que también socava la eficacia de las fuerzas de seguridad nacionales al privarlas de equipos esenciales.

En menor medida, el tráfico de armas desde Libia también alimenta el stock de armas del grupo terrorista en Níger. En febrero de 2017, un chadiano Tubu fue detenido entre Agadez y Zinder cuando estaba en posesión de munición que aparentemente transportaba desde Libia a Boko Haram en Nigeria (Panel de Expertos, 2017:189). Ambas de las anteriores ciudades son nudos comerciales de desvío de armas por excelencia, además de la capital (Niamey), pero ninguno es comparable con el volumen de tráfico en Diffa, zona que a su vez constituye uno de los principales centros de operación del terrorismo de ISWAP y Boko Haram.

Otra fuente importante de armas para los grupos terroristas del Sahel es el mercado internacional. Los grupos terroristas pueden adquirir armas a traficantes de armas internacionales, ya sea mediante compras directas o a través de intermediarios. En este sentido, cada vez hay más evidencias que sugieren que los combatientes de AQMI y al Murabitún han estado utilizando un tipo específico de arma pequeña, el fusil de asalto tipo AK 56-1, en sus ataques contra civiles y objetivos gubernamentales en el centro y el sur de Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil al menos entre 2015 y 2016. Aunque estos fusiles son fáciles de conseguir en la región, parece que se obtuvieron de fuentes transnacionales y no locales y que fueron utilizados en varios atentados, entre ellos los del Hotel Byblos y el Hotel Radisson Blu (Sévère y Bámako, Mali) por parte de Al Murabitún y el del Hotel Splendid y la cafetería Le Cappuccino (Uagadugú, Burkina Faso) y el de Grand Bassam (Costa de Marfil) por parte de AQMI (Conflict Armament Research, 2016a:39). Los códigos de fabricante y año de fabricación de los fusiles habían sido borrados intencionadamente, pero las pruebas sugieren que fueron fabricados en China en 2011. El Gobierno chino no ha respondido a las solicitudes de rastreo de estos fusiles, pero las YPG

capturaron dos fusiles chinos de tipo 56-1 con la misma serie de números de serie a combatientes de Daesh en Kobane (Siria) en enero de 2015. Lo anterior sugiere que los fusiles utilizados en África Occidental y Siria pueden haber sido transferidos originalmente al mismo usuario final o, alternativamente, los fusiles correspondientes en ambas regiones pueden reflejar el movimiento de combatientes individuales que viajaban con sus propias armas, evidenciando posibles conexiones entre combatientes en Siria y grupos armados islamistas que operan en la región del Sahel.

El mercado europeo de armas en África, especialmente de Europa central y oriental, es un foco de origen importante de presencia de armas en los ataques del Sahel. Los datos apuntan a que el Frente de Liberación de la Macina, grupúsculo integrado en la coalición JNIM que se ha atribuido recientes ataques en la región de Mopti, ha empleado fusiles de origen europeo. Entre estas armas de fuego se encuentra un AK63 de fabricación húngara marcado con una etiqueta de importación iraquí, que se utilizó en un ataque en Tenenkou en enero de 2015. Además, el grupo empleó un fusil Tabuk AKMS fabricado en Irak en 1987, un tipo que no se había visto antes en la subregión (Conflict Armament Research, 2016a:41). Tras un ataque contra una patrulla de gendarmes cerca de Dialloubé el 19 de enero de 2016, las fuerzas de seguridad malienses recuperaron el arma. En el caso de AQMI, un segundo fusil recuperado tras el atentado de Grand Bassam en marzo de 2016 compartía número de serie con un lote de fusiles previamente documentado en arsenales tanto de las fuerzas armadas malienses como marfileñas, así como con un fusil incautado por las agencias de seguridad nigerianas tras un enfrentamiento con combatientes armados de este grupo en 2013. Si bien esta coincidencia no constituye una prueba definitiva de que el rifle proceda de Mali o Costa de Marfil, tampoco se diferencia notablemente de las armas pequeñas que suelen encontrarse en la región (Conflict Armament Research, 2017:42).

Antes del inicio de los atentados a mediados de 2015 ya había en la zona material de origen europeo. A mediados de 2014, las fuerzas internacionales descubrieron una caja de cartuchos polacos entre las fuerzas del MNLA cerca

de Kidal. El Gobierno polaco confirmó que los proyectiles probablemente fueron suministrados al contingente polaco de mantenimiento de la paz en el Líbano a principios de la década de 1990, y posteriormente transferidos a las autoridades libanesas tras la retirada del personal. La aparición de estos proyectiles entre actores no estatales en el norte de Mali tras la retirada de la fuerza polaca en el Líbano en 2009 indica que previsiblemente serían traficados desde Oriente Medio a Mali en un periodo relativamente breve (Conflict Armament Research, 2017:42).

Poniendo el foco de nuevo en Boko Haram, los sistemas de armas incautados en operaciones en Níger incluían fusiles, ametralladoras y lanzagranadas de origen chino, ruso y búlgaro. El análisis de la munición hallada en la región nigerina de Diffa muestra que el grupo nigeriano obtiene material de diversas fuentes, incluidos los arsenales nacionales de los países en los que opera. Los cartuchos más recientes encontrados fueron fabricados en Argelia, China y Nigeria desde 2012. Parte de la munición china fue vendida originalmente a las autoridades nigerianas, y la munición de Nigeria incautada en los arsenales del grupo terrorista era de fabricación nacional para las fuerzas armadas (De Tessières, 2018:55).

En definitiva, el origen de las armas empuñadas por los grupos terroristas en el Sahel puede encontrarse en fuentes nacionales, regionales e internacionales. Estas fuentes incluyen mercados negros, robos, arsenales militares y policiales y mercados negros internacionales. Sin embargo, vemos cómo en el caso de los grupos afiliados a Al Qaeda, el suministro de armas, munición y material militar relacionado tiene su punto de origen en el mercado transregional o internacional más que en el entorno subregional, con Libia como una de las principales fuentes de origen, mientras que en el caso de ISWAP o Boko Haram, el saqueo de arsenales nacionales y del personal de las fuerzas de seguridad, especialmente de Níger y Nigeria, constituye su principal canal de suministro armamentístico, aunque no el único. Ambas tácticas comparten un mismo objetivo, centrado en armarse frente a un enemigo de origen estatal o comunal, pero vemos diferentes estrategias que responden a un plan de comunicación distinto en el ideario extremista en África Occidental.

Teniendo en cuenta el análisis de las fuentes de armas y municiones que obtienen estos grupos extremistas, no es de extrañar que los esfuerzos para combatir el extremismo violento en la región se hayan centrado también en suprimir el flujo de material militar que refuerza las capacidades operativas y de expansión de estas organizaciones.

Se han puesto en marcha diversas estrategias y políticas para impedir la adquisición de estas armas y munición por parte de los grupos extremistas, como los controles fronterizos y el refuerzo de las medidas de seguridad en las zonas de conflicto. A pesar del cambiante contexto internacional, estas medidas han mostrado resultados positivos a la hora de reducir la disponibilidad de material militar que alimenta los planes y objetivos del extremismo violento.

Sin embargo, resulta indispensable examinar estas políticas con mayor detalle para comprender su eficacia y evaluar el impacto de las medidas adoptadas. Aunque estos esfuerzos han obstaculizado sin duda la capacidad de los grupos terroristas a la hora de adquirir armas y ampliar sus capacidades, es importante supervisar y reevaluar continuamente la eficacia de estas políticas para garantizar que siguen siendo efectivas ante la evolución de las amenazas.

4. Panorama de las estrategias de lucha contra el terrorismo y el tráfico y contrabando de armas en el norte de África y el Sahel

Tradicionalmente, los esfuerzos para combatir el tráfico de armas en el norte de África y el Sahel se han centrado en mayor medida en medidas de interdicción y aplicación de la ley. Esto ha incluido la incautación de armas y la detención de traficantes, así como la cooperación entre las fuerzas del orden nacionales e internacionales, entre otros esfuerzos. Sin embargo, estas estrategias han tenido un éxito limitado a la hora de abordar el problema, ya que las redes delictivas y el resto de los actores criminales han mantenido una fuerte capacidad de adaptarse y eludir la detección.

Por ello, para combatir las numerosas amenazas securitarias que desvela el mercado criminal de armas y su instrumentalización por parte del extremismo violento, la comunidad internacional, las organizaciones regionales y los países han puesto en marcha diversas políticas dirigidas tanto a combatir sus esfuerzos por separado como su posible convergencia común. Así, las políticas no solo han ido dirigidas a ejercer un poder duro sobre las redes y organizaciones delictivas, sino que también han ido destinadas a un fortalecimiento de los canales de inteligencia, prevención y cooperación entre países y organismos.

4.1. Políticas públicas de prevención y respuesta de alcance multinivel

Las regiones de estudio son dos de las áreas geográficas que más se han visto afectadas por el terrorismo y el tráfico de armas en el interior de sus fronteras, y la fuerza militar ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra su posible retroalimentación en conflictos en curso.

Por un lado, las fuerzas armadas nacionales han proporcionado la principal respuesta militar a los grupos terroristas de la región. Han llevado a cabo operaciones para desarticular y dismantelar redes terroristas, incautar alijos de armas y detener o eliminar a miembros clave de estos grupos. Las fuerzas armadas malienses, con el apoyo de socios internacionales, han llevado a cabo numerosas operaciones contra la coalición JNIM y otros grupos afiliados, así como contra la rama de Daesh afincada en el Sahel. Del mismo modo, las fuerzas de seguridad nigerinas han desplegado un esfuerzo sustancial en su participación en operaciones contra Boko Haram y las franquicias de Daesh en el Sahel (El-Sahel) y en la cuenca del Lago Chad (ISWAP), resultando en la detención de varios de sus miembros, el desbaratamiento de operaciones planificadas y el enjuiciamiento de militantes e insurgentes de los movimientos radicales.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad de la región también han desempeñado un papel fundamental en la seguridad de las fronteras y el control de la circulación de personas y mercancías a través de ellas. Esto es

especialmente importante en el Sahel, donde se veía en anteriores secciones del presente informe cómo la porosidad de las fronteras ha permitido la circulación de grupos terroristas e individuos vinculados al crimen organizado. Con unos esfuerzos militares dirigidos a reducir las capacidades de los grupos criminales, el G5 Sahel se creó en 2014 como una iniciativa política destinada a fomentar la colaboración entre Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger para hacer frente a retos comunes, haciendo especial énfasis en el terrorismo y la delincuencia organizada como elementos a combatir más intensamente. Para contrarrestar la amenaza del primero, estos países crearon posteriormente la Fuerza G5 Sahel. Esta Fuerza Conjunta dirige, desde su concepción en 2017, operaciones contra el terrorismo y las organizaciones delictivas en las que se encuentran involucrados (como las operaciones Sama I, II y III, que buscaban controlar las regiones fronterizas entre Mali, Níger y Nigeria, y neutralizar a los grupos terroristas operativos).

Desde diciembre de ese mismo año, las Naciones Unidas presta asistencia a la Fuerza del G5 Sahel a través de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA). Además del apoyo directo y el reabastecimiento de los batallones por parte de los estados miembros del G5 Sahel, la ayuda de la ONU ha sido crucial para subsanar deficiencias críticas que han impedido la movilidad y la capacidad operativa de la fuerza. Esto ha incluido provisiones como combustible, raciones, evacuaciones médicas y asistencia de ingeniería para la construcción de campamentos. Cabe señalar que la ayuda de la ONU no es la única forma de apoyo que recibe la Fuerza del G5 Sahel. La fuerza también se beneficia del apoyo bilateral y de la ayuda directa de sus estados miembros en términos de reabastecimiento de los diferentes contingentes con elementos esenciales como combustible, raciones y otros recursos necesarios (De Coning y Karlsrud, 2021:4).

REGIONAL SECURITY RESPONSES IN THE SAHEL

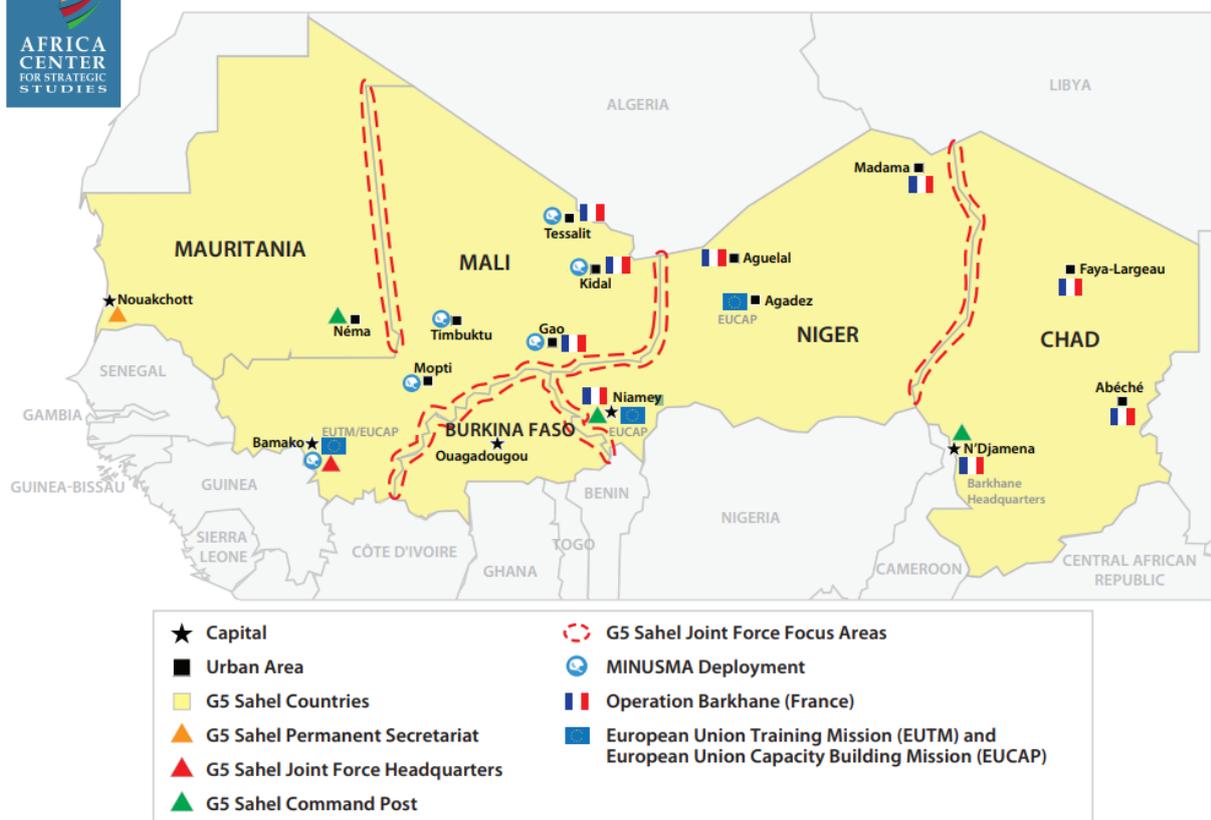


Figura 11. Respuestas regionales de seguridad en el Sahel. Fuente: Africa Center (2019)

Aunque en un principio iba a ser una medida temporal, la ayuda de la ONU a la Fuerza G5 del Sahel se ha ido reforzando progresivamente desde su mandato inicial. Sin embargo, aunque esta asistencia se ha considerado esencial y crítica, una serie de obstáculos han impedido que la Fuerza G5 Sahel aproveche plenamente el apoyo prestado. Según un informe de junio de 2020 del Secretario General de la ONU, la formulación actual de la Fuerza G5 Sahel no es sostenible en el largo plazo por su total dependencia de financiación de sus donantes, lo que impide la planificación a largo plazo (Secretario General, 2020:10). Además, Mali y Burkina Faso se encuentran reconfigurando su actitud colaborativa con la alianza, diversificando las relaciones en la región para hacer frente a los retos compartidos. A principios de 2023, los ministros de Asuntos Exteriores de Mali, Guinea y Burkina Faso, se reunieron en la capital de Burkina Faso, tras una visita a la región del ministro de exteriores

ruso Sergei Lavrov. La reunión tuvo lugar poco después de que el Primer Ministro de Burkina Faso sugiriera formar una “federación” con el vecino Mali para impulsar su fortaleza económica (North Africa Post, 2023). Las relaciones asociativas se encuentran así en un proceso de intenso cambio, corriendo el riesgo de eludir capacidades conjuntas en la lucha contra las amenazas emergentes en los países de la zona.

Las fuerzas armadas nacionales también han participado en la lucha contra el tráfico de armas en la región. Para ello se han llevado a cabo operaciones de incautación de armas y munición, y se ha perseguido a individuos y grupos implicados tanto en su tráfico como en su contrabando. Sin embargo, a pesar de las numerosas operaciones y los resultados mostrados en fuentes abiertas, pocos de los países de estudio ofrecen una perspectiva completa del volumen de incautaciones de armas. Si tenemos en cuenta los datos del tráfico de armas de la UNODC, que van hasta el año 2020, vemos cómo solo algunos países ofrecen sus datos de incautaciones en periodos señalados (Marruecos desde 2016, Túnez para el periodo 2016-2018, Libia entre 2016 y 2017, Burkina Faso entre 2011 y 2017 y Níger solo en el año 2012) mientras que otros no presentan ningún dato sobre su volumen, como es el caso de Mali, Nigeria y Libia (UNODC, n.d.). Esto obstaculiza la comprensión de la magnitud real del fenómeno, si bien suele ser una práctica habitual en este y otros mercados criminales como el tráfico de drogas⁹. La ausencia de voluntad y/o capacidad para mostrar y monitorizar el volumen de economías ilícitas en el interior de los países son dos de los potenciales motivos de ocultación de los datos, aunque debido a la evidente limitación a la hora de conocer las verdaderas causas, no es posible más que realizar un ejercicio especulativo del caso.

Aun así, las evidencias mostradas en fuentes abiertas destacan que las operaciones militares han tenido cierto éxito a la hora de degradar las capacidades de los grupos criminales y limitar su libertad de movimientos, así como coartar parcialmente el tráfico de armas en el interior de los países

9 Para analizar el volumen del tráfico de drogas en los países de estudio, el resultado de la investigación arrojaba las mismas limitaciones. Para más información véase Aguilera, A. (2022). *Terrorismo y tráfico de drogas en África*. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

objetos de estudio. Sin embargo, la capacidad del crimen organizado para adaptarse y cambiar de táctica ha dificultado su eficacia de manera sustancial. Las operaciones de la Fuerza Conjunta G5 Sahel, además, no han logrado impedir que se desarrollen ataques indiscriminados contra civiles y fuerzas de seguridad en las zonas fronterizas, por lo que tampoco puede catalogarse de unos esfuerzos con un éxito rotundo. De hecho, la retirada de Mali tras las últimas turbulencias políticas experimentadas por este país¹⁰ no está ayudando a conseguir fortalecer la eficacia de las misiones de la fuerza conjunta.

Otra estrategia importante ha sido el uso de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad para desbaratar la financiación y la logística de los grupos terroristas. Esto ha incluido medidas como la congelación de los activos de las organizaciones sospechosas de pertenecer al extremismo violento, la interdicción del flujo de armas y la interrupción del comercio de mercancías ilegales. El intercambio de inteligencia y la coordinación entre los países de la región y con los socios internacionales han sido fundamentales en estos esfuerzos, a pesar de las numerosas críticas por supuestos celos a la hora de compartir la información. De hecho, existe una falta de confianza que ha dificultado tradicionalmente el intercambio de inteligencia entre las fuerzas europeas y africanas en el seno de la MINUSMA. En la Unidad de Fusión de Información de Todas las Fuentes (ASIFU, por sus siglas en inglés), creada en 2014 para ayudar a la misión a contrarrestar las amenazas asimétricas a las que se enfrentan su personal y la población local, los soldados africanos no han tenido acceso directo a los equipos y capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento que los países europeos que aportan contingentes (*troop-contributing countries* o TCC), lo que refleja una colaboración y confianza inadecuadas entre los TCC interregionales. El desigual despliegue y distribución de analistas y medios tecnológicos en la misión, además, impiden la eficacia de la ASIFU y ponen en mayor peligro a los soldados más expuestos

10 El coronel Assimi Goïta dirige el consejo militar que tomó el control de Mali en agosto de 2020. En mayo de 2021, destituyó al presidente interino y al primer ministro, tras un desacuerdo sobre sus esfuerzos por sustituir a dos de sus partidarios en el gabinete. La fuerza y el control de Goïta sobre el proceso político colisiona a su vez con actores rebeldes que configuran la Coordinación de los Movimientos del Azawad (CMA), estancando el proceso de paz que de lugar a la convocatoria de nuevas elecciones y la elaboración de una nueva Constitución.

al no beneficiarse de la capacidad de inteligencia de la misión (Albrecht et al., 2017:3).

El camino a seguir es largo y la creación de confianza y capacidades coordinadas necesaria, mostrando la voluntad de perfeccionar la puesta común de esfuerzos de seguridad y de cooperación conjuntos entre la región y con los aliados fuera de ella. La cooperación internacional ha sido fundamental para hacer frente a la proliferación de amenazas a la seguridad, con unas operaciones que han demostrado recibir un gran peso con respecto a la capacidad de respuesta. Aquí destaca la Operación Barkhane, lanzada en 2014 y dirigida por Francia en la región del Sahel. La operación ha supuesto el despliegue de 4.500 efectivos franceses en la región, con el objetivo no solo de luchar contra grupos terroristas y neutralizar amenazas a la seguridad física de la población y las fuerzas de seguridad sino que también ha incluido un componente centrado en la lucha contra el tráfico de armas mediante la interceptación de las rutas de contrabando y la desarticulación de las redes de tráfico de armas. La misión consiguió incautar al menos dos toneladas de APAL cada trimestre entre 2015 y 2019, lo que revela un gran éxito en la medición del impacto de la misión al menos en cuanto a contención del crimen organizado dedicado al tráfico y contrabando de armas (Jesse, 2021). Sin embargo, y tal como se verá más adelante, la falta de coordinación con las instituciones públicas tanto políticas como militares en países como Mali o Burkina Faso, el deterioro de las condiciones de seguridad y la falta de coordinación internacional con los aliados regionales ha mermado sustancialmente la acogida y el apoyo a la presencia de tropas occidentales en la zona¹¹, lo que ha supuesto la retirada de la misión sobre el terreno y el fin del liderazgo de las potencias europeas en la prestación de asistencia a los países sahelianos en sus retos a la seguridad.

11 La reputación de Francia se ha resentido debido al deterioro de las condiciones de seguridad. Apenas un tercio de los malienses se mostró satisfecho con la Operación Barkhane en 2021, y el 45% de los descontentos culpó a los franceses de connivencia con terroristas y separatistas. Cuando el presidente Macron anunció en julio de 2021 que Francia reduciría a la mitad su presencia de tropas en la región, el gobierno de transición maliense respondió contratando al Grupo Wagner, un grupo de mercenarios rusos con un notorio historial de vulneración de derechos humanos. Posteriormente, la junta expulsó a un centenar de soldados de las fuerzas especiales danesas sin justificación y, a continuación, expulsó al embajador francés. Fuente: The Economist

En línea con esta degradación de las alianzas tradicionales, la misión de formación de la Unión Europea destinada a apoyar a las Fuerzas Armadas de Mali en su lucha contra el terrorismo y el tráfico de armas (EUTM Mali) cuenta con serios obstáculos a la hora de proporcionar formación y asesoramiento a los militares malienses en áreas como logística, inteligencia y operaciones antiterroristas, relegando el momento cooperativo a la Misión de Capacitación de la Unión Europea en Níger (EUCAP Sahel Níger). Las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas malienses, la falta de equipamiento y estructura de estas o la falta de voluntad política para llevar a cabo las reformas institucionales necesarias limita en gran medida la efectividad de la misión de apoyo. Si entramos en la infracapacitación a nivel operativo de las fuerzas de seguridad fuera del Sahel, vemos cómo la Guardia Costera de Libia tiene el mismo problema a la hora de vigilar las fronteras y luchar contra la delincuencia transfronteriza. En palabras del Jefe de la Unidad de Gestión de Fronteras de la Misión de asistencia fronteriza de la UE en Libia (EUBAM), “los guardias fronterizos libios carecen de capacidades operativas, incluido equipamiento, y necesitan tecnología fronteriza inteligente, que aún no se ha implantado. En la actualidad, las fronteras terrestres libias no están totalmente protegidas por la guardia fronteriza nacional debido a la falta de equipos adecuados, personal y procedimientos operativos especiales” (EUBAM Libia, 2023).

Otra limitación significativa, en el caso de EUTM Mali, es la falta de oficinas descentralizadas sobre el terreno, que obligaba al personal a operar desde el cuartel general de la misión, lejos de las zonas de conflicto real, lo que se ha traducido en una comprensión limitada de la situación sobre el terreno hasta hace relativamente poco (Baudais y Maïga, 2022:15). Además, la misión depende mayormente de la MINUSMA para desplegar personal sobre el terreno, y debido a las limitaciones de personal externo a la realidad local, la brecha entre las fuerzas internacionales y las autoridades locales se ha vuelto cada vez más evidente.

La lucha contra los fenómenos delictivos tanto del terrorismo como del crimen organizado, así como su posible puesta en marcha conjunta, son elementos que han demostrado necesitar una respuesta multinivel, especialmente en los ámbitos local, nacional y regional. En este último aspecto, organismos de alcance regional como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha buscado ofrecer una respuesta más ambiciosa en la lucha contra los retos que deterioran el panorama regional de seguridad. La Comisión de la CEDEAO, junto con sus estados miembros y la propia sociedad civil han perseguido tomar medidas decisivas para abordar las causas subyacentes de la delincuencia organizada, mejorar la prestación de servicios y apoyar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Para combatir el blanqueo de dinero y la corrupción, que facilitan los mercados ilícitos, también se ha planteado la necesidad de ofrecer respuestas de mayor alcance. Estas cuestiones se debatieron en el primer Diálogo Regional entre Múltiples Partes Interesadas sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional en África Occidental, celebrado en Abuya (Nigeria) en marzo de 2022. El acto incluyó el lanzamiento de la Red de Investigación sobre la Delincuencia Organizada en África Occidental (WARNOC, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es promover respuestas eficaces a la delincuencia organizada en África Occidental (CEDEAO, 2022). A la espera de medir la efectividad de la plataforma, tanto la CEDEAO como la Unión Africana se enfrentan a retos similares y multitud de cuestiones urgentes que abordar con respecto a la región del Sahel, especialmente tras la suspensión de Mali, Guinea y Burkina Faso de ambos organismos a raíz de los golpes de Estado sucedidos en sus territorios entre 2020 y 2022 y el malestar social generado a raíz de las turbulentas transiciones políticas y la virulencia de la actividad terrorista en la zona. La aplicación de los acuerdos en materia de lucha contra el tráfico de armas pequeñas y ligeras como la Convención de la CEDEAO sobre Armas Pequeñas y Ligeras de 2006 y sus reuniones anuales de Comisiones Nacionales (NATCOM) también corren el riesgo de encontrarse en entredicho en el actual escenario de confrontación política y ausencia cooperativa, frustrando potenciales marcos legislativos futuros de mayor envergadura como el Protocolo de Nairobi de 2004 para la prevención,

el control y la reducción de las armas ligeras y de pequeño calibre en África Oriental¹².

Por su parte, las Naciones Unidas ha venido realizando importantes esfuerzos para hacer frente a la delincuencia organizada y el terrorismo a escala internacional, regional y subregional. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su Red Mundial de organismos regionales similares al GAFI han desempeñado un papel esencial en la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. A su vez, las *Cuarenta Recomendaciones* revisadas del GAFI sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación establecen normas internacionales exhaustivas para que los estados miembros adopten y apliquen medidas legislativas y reglamentarias de lucha contra la financiación ilícita.

El Foro Global contra el Terrorismo (GCTF, por sus siglas en inglés) también ha trabajado para prevenir y reprimir el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, en particular en la adopción de las Buenas Prácticas de La Haya sobre el Nexo entre la Delincuencia Organizada Transnacional y el Terrorismo, mientras que de una manera más ambiciosa, la aplicación de los convenios internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999), son cruciales para este tipo de esfuerzos (Consejo de Seguridad, 2019:3).

Tanto la ONU como los organismos regionales vinculan con frecuencia el desarrollo y el desarme en sus programas. Algunos de ellos persiguen un cambio de actitud frente al uso de estas armas y su consiguiente reducción de la demanda, mientras que otros optan por la recolección y destrucción de las mismas, a menudo a cambio de incentivos al desarrollo, para evitar su

12 El Protocolo de Nairobi de 2004 se considera uno de los acuerdos regionales más completos que vinculan jurídicamente a la Comunidad del África Oriental en materia de armas pequeñas y ligeras. Se basa en el Protocolo de la SADC de 2001, pero se centra en subsanar las lagunas detectadas en el acuerdo anterior. El protocolo complementa la Declaración de Nairobi de 2000, que abordaba la cuestión de la proliferación de armas pequeñas y ligeras ilícitas. Fuente: Weapons Law

recirculación (Pytlak, 2020:7). Como se ha comentado a lo largo del capítulo introductorio, y a pesar de que la ONU ha aprobado numerosos mandatos entre 2006 y 2015 prohibiendo la venta o el suministro de armas a países en conflicto o con un bajo historial de derechos humanos, los países del Sahel todavía ven circular más de doce millones de armas pequeñas y ligeras en el interior de sus fronteras en la actualidad. Por ello, políticas orientadas al desarme y el desarrollo son precisamente las que necesitan ser incentivadas, teniendo en cuenta el importante rol que desempeña la rápida disponibilidad de armas de fuego en este tipo de contextos.

En conclusión, las políticas actuales para combatir el terrorismo y el tráfico de armas en el norte de África y el Sahel incluyen una combinación de fuerza militar, inteligencia y aplicación de la ley y cooperación regional e internacional. Las estrategias de lucha contra estos fenómenos delictivos, si bien han tenido cierto éxito a la hora de degradar las capacidades de los grupos terroristas, desbaratar sus operaciones y limitar su acceso a armas y fondos, también han demostrado una realidad desalentadora. El terrorismo presenta cualidades de resiliencia y adaptación suficientes como para cambiar de táctica y desbaratar los esfuerzos en curso, mientras que cuestiones como la financiación, el acceso a recursos o la falta de confianza a la hora de intercambiar información todavía persiguen a los organismos encargados de velar por la seguridad a todos los niveles. Así, resulta necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad y de los países de la región para hacer frente a estas amenazas de manera efectiva.

4.2. Propuesta de nuevas políticas y estrategias para la seguridad y el desarrollo en el norte de África y el Sahel

a) Reforzar el control y la seguridad de las fronteras.

Con el fin de monitorizar y medir el impacto del terrorismo y su relación con el mercado criminal de armas, es fundamental mejorar la gestión de fronteras para coartar la entrada y salida del tráfico y contrabando de todo tipo de bienes, especialmente en puestos fronterizos con países que, como Libia, suponen un punto de origen de armas considerable.

El anterior tipo de aproximaciones políticas puede lograrse de manera dual. Por un lado, desplegando más personal y empleando tecnología más avanzada como drones y sistemas biométricos, buscando reprimir el flujo de armas que atraviese sus fronteras tanto hacia el interior como al exterior. A menudo, las autoridades fronterizas de los países norteafricanos y sahelianos carecen de medios logísticos modernos e infraestructuras adecuadas, como equipos de detección y escáneres, por lo que no se utilizan técnicas de inteligencia para combatir el fraude como podría ocurrir en otros países con herramientas más avanzadas desde la perspectiva tecnológica. De hecho, las administraciones aduaneras no disponen de bases de datos nacionales sobre infracciones e incautaciones, y existen dificultades para controlar los desplazamientos masivos y frecuentes de trabajadores transfronterizos (Security Council Report, 2012:13). Las nuevas políticas y estrategias deben buscar la inversión en tecnología para mejorar la capacidad de rastrear e interceptar el tráfico ilegal de armas y las actividades terroristas. Por ejemplo, utilizando tecnología de vigilancia avanzada, como imágenes por satélite, y empleando la inteligencia artificial y herramientas de detección y análisis de datos para identificar y rastrear actividades sospechosas.

Por otro lado, resulta indispensable manejar el volumen de las incautaciones y la rápida disposición y clasificación de estas en los arsenales nacionales e incluso su posible destrucción. Mediante una gestión adecuada de las armas incautadas, los gobiernos pueden garantizar que no contribuyen a la proliferación de armas ilícitas en la región o que se redirige a grupos y actores de naturaleza violenta. En su lugar, una mejor gestión y manejo de las incautaciones puede permitir que sean utilizadas para fines legítimos de seguridad o, si es necesario, destruirse para evitar que se utilicen en nuevas actividades delictivas. Para ello debe establecerse, a modo preventivo, un plan de almacenamiento y gestión que prevea un aumento abrupto eventual a raíz de una operación contra el crimen organizado exitosa. Además del control de un volumen considerable de armas y munición incautadas de forma puntual, el control de inventario debe realizarse periódicamente a fin no solo de contabilizar todas las armas de fuego y municiones en poder de las fuerzas de seguridad

del Estado, incluyendo el registro de cada arma, su número de serie y su ubicación actual, sino también asegurarse de un correcto almacenamiento en instalaciones seguras para evitar robos y accesos no autorizados. Si tenemos en cuenta un posible excedente de armas, bien porque ya no se necesiten o porque quede fuera del límite de capacidad permitido en los arsenales, estas deben ser destruidas para evitar que caigan en manos equivocadas.

Finalmente, este tipo de políticas de control y seguimiento del volumen real de armas almacenadas en arsenales nacionales necesitan ser acompañadas de una estrategia de formación y capacitación que permita al personal de seguridad recibir instrucciones sobre el manejo y la gestión adecuados de las armas para reducir el riesgo de pérdida o robo, así como establecer un plan de rendición de cuentas que se aplique en términos prácticos y que garantice que el personal de seguridad responda ante cualquier pérdida o robo de armas de fuego y munición.

La aplicación de esta y otras políticas de reestructuración de los arsenales nacionales permitirá, en última instancia, un riguroso control sobre el material armamentístico disponible y funcionará como método de acción preventiva sobre todo asalto, ataque o emboscada que busque desvalijar el stock existente por parte del terrorismo y otros actores armados.

b) Impulsar la transparencia político-institucional y el intercambio de información.

Existen varias razones por las que mejorar la transparencia y el intercambio de información es esencial para el éxito de los esfuerzos contra el terrorismo y el crimen organizado. En primer lugar, conocer la distribución de los recursos disponibles e involucrarse en prácticas cooperativas con homólogos intrainstitucionales -confiando entre las diferentes administraciones desde lo local a lo nacional-, regionales e internacionales contribuyen a identificar y desbaratar actividades ilícitas antes de que puedan llegar a producirse. Al compartir información sobre personas, grupos o actividades sospechosas, las fuerzas de seguridad pueden ser alertadas de posibles amenazas y tomar medidas preventivas para evitarlas.

Esta transparencia e intercambio de información pueden ayudar también a rastrear el movimiento de armas y fondos ilícitos, lo que es fundamental para dismantelar las redes delictivas y desbaratar sus planes. Cuando los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras instituciones pertinentes comparten información sobre rutas de contrabando y tráfico, tramas de blanqueo de capitales y otras actividades ilegales, pueden coordinar mejor sus esfuerzos para detectar e interceptar transacciones ilícitas que ocurran o tengan previsión de ocurrir en el interior de sus territorios.

La transparencia y el intercambio de información puede además contribuir a cimentar una relación de confianza y cooperación entre las distintas instituciones implicadas en la lucha contra el mercado ilícito de armas y el terrorismo. Cuando los organismos pertinentes comparten información entre sí, pueden desarrollar una comprensión más completa del panorama de amenazas, identificar lagunas en sus propios conocimientos y capacidades, y trabajar juntos para desarrollar estrategias eficaces para hacer frente a estos desafíos. Sin embargo, mejorar este tipo de prácticas pasa por aumentar la concienciación y la voluntad de cambio, así como incrementar la inversión en tecnología y herramientas que puedan facilitar el intercambio de información, algo que se ha demostrado un desafío para las administraciones de algunos países de la región. Fomentar una cultura de transparencia en el Sahel no es sinónimo de encontrar una cultura compartida como ocurre en las relaciones y plataformas de comunicación e intercambio de conocimientos entre países vecinos como España y Marruecos¹³ (que a pesar de sus reticencias consiguen encontrar la manera de hacer frente a una necesidad común), pero es un objetivo buscado en numerosas declaraciones de socios y organismos internacionales. De hecho, tal y como se comprobará más adelante, factores como las diferencias culturales y sociales entre el modo de compartir información -en algunos países el carácter informal o las conversaciones orales sin necesidad de plasmarlo en un informe suelen ser la práctica habitual- y las percepciones y recelos a la

13 Para más información sobre la naturaleza de la cooperación entre España y Marruecos en materia judicial, policial y de inteligencia, véase: Pérez, D. (2022). *Cooperación hispano-marroquí en materia judicial, policial e inteligencia en la lucha contra el yihadismo y la radicalización violenta*. Anuario del Terrorismo Yihadista 2021. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

hora de compartir información sensible es la tónica general entre agencias y servicios de información. Por tanto, una política sensibilizada con este tipo de dinámicas puede tener un grado de efectividad con mayor recorrido.

c) Atacar las redes financieras de oferta y demanda.

Desarticular las redes financieras que apoyan el mercado de armas dificulta, entre otras variables, las operaciones de las redes de tráfico y contrabando de armas y su alimentación del extremismo violento. Debido al hecho de que las fuentes de origen de armas van desde el mercado negro hasta el robo y saqueo de arsenales militares y policiales, la lucha contra el tráfico de armas en la región del norte de África y el Sahel requiere un enfoque caso a caso que aborde la prevalencia de cada una de las posibles fuentes de origen. Junto con las medidas de refuerzo de los controles fronterizos anteriormente mencionadas, la interrupción del comercio ilegal de armas y la persecución de las organizaciones criminales y los funcionarios corruptos que facilitan el flujo de armas a los grupos terroristas se suma a la estrategia de neutralización de redes facilitadoras de la economía ilícita regional.

Las nuevas políticas y estrategias deben inexorablemente centrarse en abordar las causas profundas de la expansión de las economías ilícitas como método preferente de los actores no estatales, abordando los factores socioeconómicos subyacentes que contribuyen a la escalada de la economía informal que alimenta la intersección entre crimen organizado y la insurgencia radical. Al abordar las causas profundas de las dinámicas de la economía ilícita se incrementa la capacidad de detección de vulnerabilidades en las rutas y redes de suministro, amplificando sustancialmente la capacidad de coartar tanto la oferta como la demanda de armas.

Si entramos en los agentes de seguridad como actores participantes en el entramado delictivo del mercado de armas, las condiciones del personal y una reestructuración de sus remuneraciones son dos aspectos que permiten incentivar el desligamiento de las malas prácticas por parte de fuerzas del orden y jefaturas regionales, teniendo en cuenta que no solo una retribución

digna es indispensable en estos casos sino que también debe primarse equipar a las fuerzas del orden con material y recursos que permita ejercer de una manera correcta y funcional el uso de la fuerza y la lucha contra los fenómenos delictivos anteriormente descritos. Los líderes religiosos y las instituciones informales tienen mucho que ofrecer en este campo, al aportar un potencial único para cambiar la visión pública, modelar valores y convertirse en una voz única para atajar la voluntad civil de disponer de armas de fuego para su propia seguridad.

Si bien es cierto que no es una voluntad desinteresada, y que suele verse motivada por la peligrosidad del entorno y una necesidad percibida de satisfacer una seguridad personal, un cambio de actitud desde la base es un importante paso hacia el desarme de todos los actores que contribuyen al mercado de armas y que cuentan con una mentalidad que alimenta la cultura de la violencia y la inseguridad, especialmente la población civil, uno de los grandes participantes en este tipo de economía informal.

d) Reformular los sistemas de gobernanza en estados frágiles o con bajo desarrollo.

Los gobiernos centrales tienen la responsabilidad de practicar una gobernanza fuerte, accesible y transparente, y para ello necesitan mejorar los indicadores relacionados con la arquitectura de seguridad, la división de las élites o la mejora de los servicios públicos. Según el Índice de Estados Frágiles de 2022, Mali, Nigeria, Níger, Libia y Burkina Faso ocupan unos puestos y entran dentro de la clasificación de los 30 países peores situados en términos de fragilidad estatal (Fragile States Index, 2021). Abordar los desafíos de fortaleza de las instituciones y mejorar las cifras e indicadores que miden, entre otras, la legitimidad, transparencia o efectividad de la arquitectura y administración del Estado resulta necesario a fin de combatir eficazmente unos desafíos a su seguridad que amenazan con expandirse más allá de las actuales zonas de operación.

Las nuevas políticas y estrategias deben también estar orientadas a la creación de capacidad local, por ejemplo proporcionando formación y equipamiento a las fuerzas de seguridad, así como abordando problemas subyacentes como la pobreza, el desempleo y la falta de educación, que pueden ser factores de radicalización y reclutamiento en grupos terroristas. Esto puede lograrse a través de iniciativas como el Programa Mundial sobre Armas de Fuego (GFP) de la UNODC, cuyo objetivo es ayudar a los países de la región a mejorar su capacidad para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego y mejorar la seguridad de sus arsenales.

La evaluación de los flujos de armas pone también de manifiesto la necesidad de desarrollar y mantener a nivel local prácticas de registro y control para reducir los riesgos de desvío. Estos procedimientos mejorados permitirían un seguimiento inmediato tras la actuación, una mejor comprensión de las rutas de tráfico y la recopilación de pruebas sobre las interacciones de grupos y actores armados.

e) Cooperación regional e internacional.

Resulta necesario abordar la falta de mecanismos nacionales de coordinación y enlace para combatir la delincuencia organizada transnacional y su relación con el terrorismo, un reto puesto de manifiesto por los servicios policiales y las fuerzas de seguridad en la región (Security Council Report, 2012:13). Mayores esfuerzos deberán destinarse a la creación de unidades que trabajen bajo la autoridad de fiscales especializados en la lucha antiterrorista y cooperando en los entornos regionales e internacionales, como método de intercambio de información entre países que permita llevar una monitorización constante y fehaciente sobre los movimientos a un lado y otro de la frontera.

La cooperación internacional es esencial en el intercambio de información e inteligencia, así como la coordinación de operaciones y organismos encargados de velar por la seguridad, como INTERPOL (y así lo atestiguan las operaciones KAFO, KAFO II y KAFO III o la mencionada en el capítulo introductorio TRIGGER VIII), la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones

Unidas (a través de proyectos que apoyan la aplicación de la Resolución 2370 de 2017 del Consejo de Seguridad y los Principios Rectores de Madrid) o los Paneles de Expertos del Consejo de Seguridad establecidos en conformidad con las resoluciones 1970 (2011), 1973 (2011) o 2482 (2019), por citar solo algunos. En este punto resulta indispensable también la colaboración de los socios internacionales tradicionales, con los que previsiblemente habrá que repensar las actuales relaciones, pero también será necesaria la ayuda y coordinación de las organizaciones regionales que, como la Fuerza Conjunta G5-Sahel, la CEDEAO y las misiones de la Unión Africana busquen poner fin a la financiación y relación asociativa entre el terrorismo y el negocio del tráfico de armas. En este acuerdo cooperativo, los derechos humanos, la confianza mutua y la subordinación de la misión o fuerza conjunta al derecho internacional vigente deberán erigirse como los tres principales pilares sobre los que se regirá su actuación y consiguiente legitimidad, y la asistencia técnica por parte de alianzas como el G5-Sahel deberá centrarse en la capacitación y la colaboración con la sociedad civil.

f) Buscar un diálogo transversal que transforme y sustituya la actual arquitectura de gobernanza fallida en términos de seguridad.

Las comunidades locales son cruciales para la legitimación de los actores no estatales y la erosión de la autoridad del Estado. Ejemplo de ello se da con ISWAP, grupo que ha cambiado sus tácticas de violencia indiscriminada a la provisión de bienes públicos, como asistencia sanitaria, seguridad y apoyo agrícola, para ganarse el apoyo de las comunidades de la región noreste de Nigeria. Al ganar legitimidad entre la población local, la rama afiliada a Daesh ha ampliado su alcance, compartiendo vídeos propagandísticos para promover la seguridad bajo su dominio y animando a la gente a aconsejar a sus familiares sobre las oportunidades disponibles en el territorio controlado por el grupo. El cumplimiento voluntario del grupo está surtiendo efecto y se extiende más allá de los territorios que la franquicia regional controla, habiendo personas ajenas a su zona de influencia que pagan impuestos al grupo y que devuelven a los prisioneros que huyen (Kotarska, 2023). En consecuencia, es poco

probable que el poder militar por sí solo desaloje por completo a los grupos terroristas debido a la legitimidad que ha ganado entre la población local, y una respuesta holística que incluya a la sociedad civil y a los agentes sociales necesita incorporarse al mosaico del sistema de soluciones relacionadas con la gobernanza actual.

Este canal de conversación debería contar, en su etapa preliminar de preparación, con una hoja de ruta que ejecute las decisiones y los resultados derivados de este diálogo. Mediado por organismos regionales de suficiente legitimidad – como la CEDEAO en un sentido más regional o la Unión Africana si cuenta con una acogida más ambiciosa – debería incluir entre sus participantes a miembros de la sociedad civil, instituciones intergubernamentales y representantes de las principales fuerzas conjuntas de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional. Las comunidades religiosas y líderes locales también desempeñan un papel relevante en modelar percepciones e inclinaciones al abandono del uso de armas a nivel civil. Entre los puntos a abordar deben incluirse desde reformas políticas destinadas a ampliar la presencia de las autoridades civiles competentes en las áreas de mayor fricción hasta la lucha contra la retroalimentación entre las actividades informales (como la agricultura, la ganadería o el comercio local) y el crimen organizado.

4.3. Debate sobre los factores que podrían dificultar la implementación de nuevas políticas

a) Mayor convergencia del crimen organizado y el terrorismo.

Las recientes evidencias de interacción entre el crimen organizado transnacional y el extremismo violento han puesto de relieve la necesidad de adoptar enfoques más adaptables para combatir y comprender la naturaleza interrelacionada de ambos fenómenos, la cual desafía su simple categorización. En los recientes casos de estudio en el norte de África, el Sahel e incluso si tratamos de analizar las particularidades delictivas de los grupos beligerantes en Oriente Medio, vemos cómo han surgido organizaciones intrincadas entre el terrorismo y el crimen organizado que se dedican tanto a la persecución de

una agenda política por medios violentos como al negocio de las economías criminales, lo que supone un reto importante para los gobiernos, las fuerzas de seguridad y el resto de actores internacionales. Tal y como se ha visto a lo largo del presente informe, redes delictivas del norte de África han facilitado las actividades de grupos yihadistas afiliados a Al Qaeda como AQMI o Al Murabitún, mientras que el comando central de Daesh en Siria e Irak y su rama en Libia han buscado explotar las oportunidades del contrabando y el tráfico de armas, entre otros muchos nichos de criminalidad. En el Sahel, la conexión entre delincuencia y terrorismo ha tenido un fuerte impacto como fuente de inestabilidad, proporcionando ayuda a los grupos yihadistas, que recíprocamente ofrecen protección y acceso a sus rutas controladas.

Por otro lado, el proceso de militarización de algunos países como Argelia y Túnez ha propiciado una mayor cohabitación entre el crimen organizado y el extremismo violento, lo que suscita inquietud ante la posibilidad de una convergencia entre ambos frente a un adversario compartido. Los prolongados episodios de violencia en África Occidental, en particular desde el contexto posterior a 2011, han alimentado la expansión de las empresas delictivas hacia una clientela más amplia y diversa en la región, incluyendo al terrorismo, y la reestructuración de las zonas de operaciones entre unos y otros se encuentra ahora más entrelazada que en el escenario pre-revolucionario.

Así, la creciente influencia del islamismo radical y el éxito de las operaciones militares transaharianas han afianzado aún más el nexo entre la delincuencia organizada del tráfico de armas y los grupos yihadistas. Regiones que antes estaban libres de delitos graves, como la región maliense de Mopti, se han convertido ahora en focos de tráfico de armas, vandalismo y presencia yihadista (Micallef et al, 2019:25). A pesar de las sucesivas campañas antiterroristas, la militarización del Sáhara-Sahel desde 2014 ha disminuido indirectamente la capacidad tanto del yihadismo como del crimen organizado, trasladando sus actividades a lugares estratégicos como el Paso del Salvador, enclave fronterizo entre Níger, Libia y Argelia. El traslado de la actividad delictiva a esta y otras zonas y el cambiante panorama diplomático en países

como Mali y Burkina Faso plantean nuevos retos a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado como un fenómeno conjunto en constante evolución. Por el momento, y aunque los esfuerzos actuales han logrado contener estas amenazas en rutas y márgenes limitados, no pueden descartarse riesgos futuros.

En este sentido, es necesario un examen crítico de la interacción entre la industria del contrabando y el tráfico de armas y la consolidación del extremismo violento en la región, reconociendo una relación simbiótica que a menudo permite a ambos grupos delictivos eludir el escrutinio de las fuerzas de seguridad. Dicha evaluación debería tener en cuenta no sólo la coexistencia, sino también la cooperación que existe entre estos grupos y una potencial convergencia, teniendo ejemplos cercanos en términos geográficos (como el grupo somalí Al Shabaab) y distantes (como los talibán y el negocio del opio) que pueden servir de modelo de contraste en los casos de estudio individualizados de determinados países de África Occidental.

b) Efecto en cadena con otros conflictos en curso.

Así como se ha comprobado que los conflictos armados tienen un impacto en el contrabando y tráfico de armas en la región de estudio, futuros conflictos y guerras en curso desplegadas en contextos geográficamente alejados corren igualmente el riesgo de obstaculizar la aplicabilidad de los programas y políticas destinadas a combatir el terrorismo y el crimen organizado en la parte occidental y septentrional de África. Estos conflictos en otras zonas a menudo provocan interrupciones en las cadenas de suministro de bienes ilícitos como drogas y armas, por lo que las organizaciones criminales afincadas en África pueden ver en ello una oportunidad para aumentar su producción y sus actividades de contrabando. Con más demanda, los precios de estos bienes podrían aumentar, creando más oportunidades para que los grupos terroristas se beneficien de su participación en el comercio ilícito. Esto, a su vez, podría conducir a un aumento de la violencia y la inestabilidad en la región, ya que las organizaciones criminales y los grupos terroristas compiten por el control del

mercado. También pueden tener el efecto contrario, y crear nuevos canales de suministro, expandiendo el mercado criminal de armas a más clientes e industrias.

Proliferación transfronteriza de armas pequeñas y ligeras: el impacto del conflicto de Ucrania en África Occidental

Recientemente ha habido una serie de declaraciones que ponen de relieve la preocupación por la posible entrada en África de armas procedentes de la guerra en Ucrania. Durante su discurso en la 16ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad (LCBC), el presidente nigeriano Muhammadu Buhari expresó su preocupación por la entrada de armas procedentes del actual conflicto en Ucrania en la región de la cuenca del lago Chad (Adesina, 2022). Buhari, que también presidió la cumbre, señaló que el actual conflicto en Europa, así como las situaciones de violencia en la región del Sahel en África Occidental, han agravado el terrorismo causado por grupos como Boko Haram en esta subregión del Sahel Occidental.

A pesar de los esfuerzos por combatir a estos grupos extremistas, Buhari explicó que la situación en Ucrania incluye el riesgo de introducir fuentes importantes de armas y/o combatientes que engrosan las filas del extremismo radical en la región del lago Chad. Según las mismas fuentes, al igual que una parte sustancial de las armas y municiones que se adquirieron para la guerra de Libia están llegando a la región, las armas utilizadas en la invasión de Rusia en Ucrania también pueden estar empezando a filtrarse.

Otros conflictos en curso también pueden desviar la atención y los recursos de los gobiernos de los problemas de seguridad internos, creando oportunidades para que los actores criminales amplíen sus actividades e influencia en zonas donde la presencia del Estado es débil. A medida que las instituciones estatales pierden eficacia en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, estos grupos pueden aprovechar el vacío de poder resultante, tal y como han venido haciendo hasta ahora. Por su parte, nuevos focos de conflicto en otras zonas pueden provocar la afluencia de combatientes extranjeros a la región de estudio. Algunos de estos combatientes pueden tener vínculos con organizaciones criminales o terroristas y podrían tratar de establecer nuevas redes o reforzar las ya existentes en África. Esto puede aumentar la capacidad de estos grupos para participar en actividades ilícitas y ampliar potencialmente

su alcance. Con un mayor número de combatientes, las organizaciones terroristas podrían llevar a cabo atentados más sofisticados y coordinados, mientras que las organizaciones delictivas podrían ampliar sus redes de tráfico e involucrar más a la sociedad civil en la delincuencia organizada. Esto podría provocar un aumento de la inseguridad y la inestabilidad en la región, dificultando a los gobiernos africanos el mantenimiento de la paz y la estabilidad, y también podría aumentar el riesgo de atentados terroristas más allá del continente africano, a medida que estos grupos amplíen su alcance global.

Sin ir más lejos, el estallido de violencia en Sudán a mediados de abril de 2023 ha tenido importantes consecuencias en diversas zonas, sobre todo en los países vecinos. La continuidad del conflicto en curso por el poder político no solo ha provocado un deterioro de la situación humanitaria y el desplazamiento de cientos de personas durante los primeros días de las revueltas, sino que también corre el riesgo de fomentar el crimen organizado, teniendo Sudán uno de los índices de delincuencia más altos y de resiliencia más bajos de los que se tiene registro. Además, los disturbios en la región occidental sudanesa de Darfur se extienden a menudo al vecino Chad, un país con indicadores similares a los de Sudán. Combatientes de Chad y de la República Centroafricana, asolada por la guerra, también cruzan regularmente las porosas fronteras de la región, avivando aún más el conflicto y la criminalidad. La creciente inestabilidad en Sudán plantea una nueva proyección de riesgo en el este del Sahel y África Central, y también en la zona fronteriza de la región etíope de Tigray, recuperándose tímidamente de un conflicto devastador.

La espiral de violencia en Sudán abre nuevos episodios de inestabilidad, con posibles efectos sobre la delincuencia organizada internacional, puesto que, como comentábamos en el apartado 2.1 del presente estudio, los choques externos como el estallido de un nuevo conflicto suelen tener un impacto significativo en los patrones del tráfico de armas en África y Oriente Medio.

c) Falta de confianza y cooperación.

Uno de los principales retos a la hora de aplicar nuevas políticas y estrategias es la falta de coordinación y cooperación entre los países de la región, así como entre la región y la comunidad internacional.

Los esfuerzos y voluntades políticas que necesitan subsanarse en la lucha contra el crimen organizado y su interacción con el extremismo violento se enmarcan dentro de un complejo e incierto reajuste político en varios niveles de gobernanza, incluida la agenda política nacional. Mali y Burkina Faso, que antes desempeñaban un papel crucial en los esfuerzos internacionales contra el terrorismo en el Sahel, se han visto afectados por las dinámicas populistas que han desencadenado en la toma del poder civil a manos de militares en agosto de 2020 y enero de 2022 respectivamente. Tanto en Bámako como en Uagadugú, el desencanto público revitalizado a través de los sucesivos golpes de Estado ha deteriorado los lazos con las potencias occidentales, especialmente con Francia, al intensificarse el resentimiento por la historia colonial potenciado por los nuevos gobiernos de transición maliense y burkinés. Estados Unidos también ha visto deteriorada su relación con ambos países, suspendido el libre acceso de estos a los mercados estadounidenses y a la ayuda militar y de formación (Stronski, 2023). Por su parte, la CEDEAO ha tenido dificultades para facilitar la transición a un gobierno civil en ambos países, y la capacidad de la MINUSMA para operar con eficacia se ha visto obstaculizada por los grupos armados. En general, los esfuerzos de la comunidad internacional para hacer frente a la violencia en la región parecen tener un impacto limitado.

En el caso de la Operación Barkhane, si bien consiguió neutralizar a los líderes de varios grupos yihadistas, la lucha antiterrorista contribuyó a que la vanguardia de militantes con una visión de esfuerzo globalista se transformara en una insurgencia local a gran escala. La misión no ha estado exenta de dificultades a la hora de alcanzar sus objetivos políticos en la región del Sahel y el Golfo de Guinea debido a varios obstáculos, como la política interna de sus socios, la falta de agilidad y capacidad de respuesta ante una crisis en

evolución y la dificultad para desarrollar un enfoque global que abordara tanto medidas de seguridad a corto plazo como soluciones políticas, sociales y económicas a medio plazo (Guiffard, 2023). La misión liderada por Francia ha tenido serios problemas a la hora de aplacar las tensiones en torno a su presencia y modo de actuación, puramente enfocado al aspecto militar en la respuesta antiterrorista, así como por un sentimiento percibido de liderazgo galo en la agenda política maliense que ha sido frontalmente rechazado por autoridades, especialistas y líderes espirituales sobre el terreno (King, 2023).

El hecho de que países como Mali o Burkina Faso estén reformulando su relación con Francia y sus socios europeos está provocando que el éxito de la Operación Serval -precursora de Barkhane-, que expulsó al yihadismo de la zona norte de Mali, pueda tener el efecto contrario con virtud del abandono de las tropas occidentales sobre el terreno¹⁴. Los tratos del grupo paramilitar Wagner con los gobiernos sahelianos de Mali o República Centroafricana de forma transaccional pueden acabar socavando aún más la legitimidad de estos regímenes con su propia población, en países donde el empleo eficaz de la fuerza, el cumplimiento del Estado de derecho y la prestación de servicios esenciales a sus ciudadanos están ausentes (Clarke, 2023). El apoyo del Grupo Wagner no está sujeto a condiciones, lo que da rienda suelta a los dirigentes africanos para ignorar cuestiones como los derechos humanos, las iniciativas de anticorrupción o la buena gobernanza, cronificando aún más las carencias sociopolíticas ya de por sí alarmantes de la región. Este tipo de relación podría exacerbar los problemas subyacentes a los que se enfrentan estos países y agravar la precaria situación de seguridad. La falta de rendición de cuentas y de transparencia inherente a los tratos de Wagner, de hecho, también podría provocar una mayor alienación de la población, ya de por sí vulnerable, y, en última instancia, podría conducir a la completa desintegración de estos gobiernos.

14 El percibido liderazgo francés en la aplicación de las políticas de lucha contra el terrorismo en el Sahel y el fracaso de los socios internacionales a la hora de adaptar su planificada arquitectura política y militar a las dinámicas locales son dos de los principales motivos por los que han encontrado un rechazo frontal por parte de los gobiernos de transición tanto en Mali como en Burkina Faso, desembocando en un repliegue de escala considerable de las fuerzas exteriores tradicionales.

d) Corrupción.

En los países del Sahel, la corrupción, los conflictos y la seguridad están estrechamente interrelacionados. La corrupción generalizada y las redes clientelares dentro de los sistemas políticos de los países del Sahel han facilitado el crecimiento del tráfico y el contrabando de todo tipo de economías ilícitas. Las prácticas poco ejemplarizantes, llevadas a cabo de una manera desenfrenada, han debilitado históricamente a los gobiernos regionales, erosionando la confianza pública y dejando mal equipados a los servicios de seguridad para prevenir y responder ante el estallido de un conflicto. A su vez, la inestabilidad derivada de los sucesivos episodios de violencia por el poder político y el auge del extremismo y la delincuencia han exacerbado la corrupción, creando un círculo vicioso que ha terminado por alimentar los disturbios y socavar el Estado de derecho. El conflicto en curso ha desencadenado múltiples golpes de Estado en África Occidental, con dos en Burkina Faso solo en 2022 y uno en Mali el año anterior, por el mismo líder que permitió tomar el poder por la fuerza a Keïta en 2020. Este control militar autoritario permite, a su vez, que la corrupción se extienda.

A nivel subregional, los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional deben ser complementados con una actitud ejemplarizante que contribuya a dar visibilidad a la actuación policial y de fuerzas de seguridad y disuada así la voluntad cooperativa del sector público en el crimen organizado y otros actos delictivos. Tal y como se comentaba en anteriores apartados, las evidencias apuntan a que funcionarios nigerinos han vendido armas y munición de los arsenales nacionales a grupos extremistas como Boko Haram. Del mismo modo, en Nigeria, los funcionarios de seguridad han “donado” o vendido armas a grupos locales implicados en conflictos étnicos con los que simpatizan, mientras que sus bajos salarios incentivan su participación en el tráfico ilegal de armas para obtener ingresos suplementarios (Jesse, 2021). Esta situación otorga efectivamente a los individuos el poder de decidir quién recibe protección y cómo deben resolverse las disputas, asumiendo las responsabilidades del Estado y socavando su legitimidad.

Una transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas es un paso fundamental a la hora de sanear el sector público de malas prácticas y trabajar para reducir la capacidad operacional de los mercados criminales en zonas militarizadas o con baja autoridad civil. Unas medidas de anticorrupción conjuntas y eficaces son especialmente acuciantes si se instiga a reconstruir cierta legitimidad civil y autoridad nacional en las zonas de riesgo. A su vez, las prácticas anticorrupción son fundamentales para detener el tráfico y la proliferación de armas, al ser las autoridades nacionales fundamentales en la ecuación delictiva y desempeñar un papel relevante en la entrada y salida de la mercancía de un país o el control de las rutas de paso y de los mercados de la economía sumergida. Los gobiernos de Burkina Faso, Mali, Libia, Níger y Nigeria deben hacer un esfuerzo concertado para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones necesarias para asignar fondos y recursos por razones de seguridad y económicas. El reconocimiento de la corrupción generalizada en los sectores de la seguridad, la política y la economía de estos estados debe ir seguido de un enfoque que permita identificar, juzgar y, de este modo, disuadir las prácticas corruptas de cualquier persona relacionada con el Estado. Los países de estudio deben acusar y procesar de forma transparente a las autoridades o agentes corruptos que sigan participando en la economía ilícita de armas, con el fin de disuadir a otros de vender, donar o hacer la vista gorda ante el desvío de armas o su participación en las rutas de contrabando.

Los actores de la sociedad civil también desempeñan un papel importante en la lucha contra el tráfico de armas, ya que pueden contribuir a que las autoridades rindan cuentas públicamente ante la población y el Estado. Poniendo el foco en aquellos que cuentan con una falta de transparencia en el volumen de armamento que circula en sus fronteras y que sufren de una acuciante virulencia terrorista, supone un interés común realizar un esfuerzo conjunto para combatir el fenómeno de la corrupción y fortalecer las instituciones de gobernanza. De forma vertical y en un sentido descendente, las instituciones deben ejemplarizar y dignificar las prácticas en el ámbito de la seguridad y la defensa. Una política basada en la persecución y en la disuasión, con el

apoyo de la opinión pública y la sociedad civil, puede contribuir a una rendición de cuentas efectiva, de carácter permanente y con voluntad continuista. Las medidas anticorrupción también deben ir acompañadas de esfuerzos para mejorar la visibilidad y la eficacia de las fuerzas policiales locales y nacionales.

e) Falta de voluntad política, recursos y legitimidad estatal.

La inestabilidad política y la ausencia de gobernanza en algunas zonas del Sahel a menudo obstaculizan la aplicación de nuevas políticas y estrategias, tal y como sucede con la corrupción y la falta de transparencia. Esta crisis de legitimidad tiene un impacto directo en elementos básicos como la capacidad judicial y la resolución de disputas por medio de los cauces ordinarios, y es que los países del Sahel sufren graves déficits en su capacidad para hacer cumplir la ley, lo que significa que sólo son capaces de detener, condenar y encarcelar a un pequeño número de delincuentes con respecto al número de población existente (Leggett, 2022:17). Como resultado, los individuos relacionados con actos criminales actúan con un elevado grado de impunidad, lo cual termina por alimentar las fricciones intercomunitarias y la desconfianza de la población.

La sociedad civil necesita a su vez confiar en los tribunales y los cauces judiciales y administrativos vigentes para resolver tanto sus enfrentamientos y disputas como la aplicación de la ley para los elementos criminales, sin necesidad de que recaiga el peso en la resolución de las causas mediante el uso de armas u otros mecanismos violentos. El sistema judicial debe ser garante de transparencia, agilidad y efectividad a la hora de pronunciarse sobre las disputas que puedan desembocar en un enfrentamiento armado entre uno o más grupos o individuos, proporcionando una legitimidad al sistema y una capacidad del Estado para resolver sus discrepancias de manera justa, imparcial y con un sentido disuasorio para la comisión de futuros delitos, por lo que las limitaciones de legitimidad se presentan como un especial motivo de frustración de este tipo de avances en la lucha contra los fenómenos delictivos.

Muchos países del Sahel, además, disponen de recursos limitados, tanto humanos como financieros, para aplicar eficazmente nuevas políticas y estrategias. En el informe del Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad en 2012 con motivo del estallido del conflicto en Libia, las autoridades chadianas y mauritanas informaron de que sus fronteras habían sido capaces de reforzarse incluso antes del comienzo de la crisis y que se habían enviado unidades militares especiales para monitorizar a individuos y grupos sospechosos (Security Council Report, 2012:12). Sin embargo, Mali y Níger pidieron ayuda a la comunidad internacional para proteger y asegurar sus fronteras, declarando que no disponían de medios para rastrear las armas en circulación, ya estuvieran destinadas a su país o en tránsito. Sospechando que importantes cantidades de armas estaban ocultas en su territorio, solicitaron ayuda para su identificación y recogida, por lo que es necesaria una evaluación caso por caso de la capacidad de recursos, mejora logística y disponibilidad operativa.

La infraequipación de los recursos humanos y financieros, especialmente en los países del Sahel, es un tema recurrente que suele encontrar una aceptación tanto por las fuerzas de apoyo internacionales como por las propias autoridades nacionales. A menudo, esta enumeración de retos y vulnerabilidades de seguridad se traducen en un mayor esfuerzo de capital y recursos disponibles por parte de las instituciones financieras y los socios regionales, aunque la distribución de estos recursos y la rendición de cuentas sobre la gestión del presupuesto y el material sigue siendo un asunto pendiente enfatizado tanto por líderes políticos como por organismos intergubernamentales. Así, el futuro de la seguridad en África Occidental supone un tema pendiente en la agenda pública, con unas dinámicas de conflicto que advierten de la necesidad de una lucha conjunta frente a un enemigo común.

5. Conclusión

La región de África Occidental ha sido testigo de un gran deterioro de su seguridad durante los últimos años, traducándose en un notable aumento de los conflictos y el enfrentamiento entre actores violentos. En este contexto, la proliferación de armas ligeras y pequeñas en esta y otras regiones del continente ha encontrado el modo de ejercer un impacto generalizado considerable, exacerbando los conflictos y dificultando la consecución de los procesos de paz y estabilidad entre las partes en conflicto. Más específicamente, la economía ilícita en torno al mercado de armas ha contribuido a niveles más altos de delincuencia y violencia, lo que ha llevado al desplazamiento masivo de personas y a una percepción de abandono y malestar de la población hacia unas fuerzas nacionales sin capacidad y/o voluntad de asegurar el orden y el bienestar social. Así, tanto el norte de África como el Sahel se enfrentan a múltiples retos en torno a las dinámicas criminales imperantes en la región, a lo que se le añaden otros focos de riesgo asociados como serían la agitación política, las tensiones intercomunitarias y la migración masiva en un estado de crisis que ha dejado a millones de personas en una situación humanitaria sin precedentes.

El tráfico y contrabando de armas de fuego constituye el segundo mercado delictivo más extendido en África, especialmente en el entorno rural, contribuyendo a la financiación de diversos grupos que emplean este método de violencia para atacar, someter o ejecutar otros actos delictivos con una mayor ambición y envergadura. La disponibilidad de armas también ha alimentado la posesión de material militar a todos los niveles, provocando que circule un volumen de armas de fuego y munición considerable entre la sociedad civil, con la incertidumbre a la hora de cuantificar el volumen real de armamento en circulación que eso conlleva.

El impacto desestabilizador del mercado de armas trasciende su valor monetario y supone una amenaza para la seguridad regional tanto en el entorno político como a nivel económico y social, especialmente en la región del Sahel,

que se ha convertido en el centro gravitatorio de la actividad terrorista a escala mundial. La mayor disponibilidad de armas en la región durante la última década, propiciada por unas condiciones proclives en el contexto postrevolucionario de Libia desde 2011, ha beneficiado la irrupción del extremismo violento en países como Mali, Burkina Faso, Níger o Nigeria, surgiendo una serie de movimientos islamistas con una agenda radical desde el punto de vista religioso y desde el sistema político-social. Los grupos de este tipo de violencia política han conseguido capitalizar la inestabilidad y la débil gobernanza de la región para promover sus intereses, explotando esta región como una importante zona de tránsito para las redes de armas procedentes de diversas partes del mundo.

La economía ilícita regional dedicada al tráfico y contrabando de armas, municiones, explosivos y otros materiales similares está compuesta por una amplia gama de actores con diferentes motivaciones y orígenes. Por un lado tenemos a los propios actores de corte extremista, beneficiados por el uso directo e indirecto que la posesión de armas puede proporcionar. Si bien el contrabando y la participación directa en el mercado de armas ha sido tradicionalmente instrumentalizado por algunas ramas de los movimientos terroristas más trascendentes del panorama regional (como en el caso de los combatientes de Daesh en Libia), la rentabilidad de la disposición y empleo de armas para llevar a cabo actividades de extorsión, chantaje y políticas de subversión de las dinámicas locales han demostrado tener un volumen mayor de beneficios para la causa en el plano ideológico y político. Así, se ha comprobado cómo los lugares con mayor presencia de tráfico de armas tienen una mayor probabilidad de albergar grupos de naturaleza insurgente o terrorista como actores criminales principales, en comparación con las áreas donde el tráfico de armas no es predominante (como en el tráfico de flora).

En un entorno superpuesto se encuentran los individuos y redes pertenecientes a la delincuencia organizada en el comercio ilegal de armas en las regiones septentrional y occidental de África. El comercio ilícito de armas se ve alimentado por los constantes conflictos y la inestabilidad, que crean oportunidades para que la delincuencia organizada se expanda y explote las

rutas de suministro. La relación entre delincuencia organizada y conflicto se refuerza mutuamente, ya que las economías ilícitas dedicadas al mercado de armas desempeñan un papel en cada una de las fases del conflicto y operan simultáneamente en otros fenómenos delictivos como el robo de ganado o el secuestro a cambio del pago de un rescate. Los países con conflictos prolongados, como Somalia, Sudán del Sur, República Centroafricana y Libia, tienen los niveles más bajos de resiliencia y los niveles más altos de criminalidad, atrayendo el centro gravitatorio del crimen organizado a estos puntos calientes. Otros países de la región con baja resiliencia y altos niveles de criminalidad son Níger, Sudán, Chad, Camerún y Mali, donde el mercado criminal de armas opera con independencia de los cambios políticos. A pesar de los recientes acontecimientos, como el golpe militar de agosto de 2020 en Mali, las redes clientelares y las condiciones subyacentes que fomentan las economías ilícitas permanecen intactas e incluso se han reforzado, coordinándose entre actores criminales del ámbito estatal y el no estatal. Aun con todo, las evidencias sostienen que el tráfico de armas es la economía ilícita más importante en las regiones de elevada mortalidad, conflicto e inestabilidad, destacando que en este mercado los grupos terroristas o insurgentes proporcionan una mayor dedicación a las actividades propias del crimen organizado que en otros mercados ilícitos.

Finalmente, la rápida expansión de los conflictos violentos en los espacios de África Occidental ha traído como consecuencia una militarización de la sociedad civil, la cual a menudo termina por tomar parte activa y adquirir las armas ilegalmente en circulación. La población se ha convertido en un participante activo en el comercio de armas, y la propiedad privada de armas de fuego ha pasado a ser esencial para garantizar su propia supervivencia, sobre todo para comunidades étnicas, grupos de autodefensa, pastores de ganado y otros colectivos que se enfrentan a constantes amenazas de violencia. La falta de presencia gubernamental en algunas zonas ha dado lugar al desarrollo de una “cultura de las armas”, como se observa en la región de Karamoja pero también en la zona de la Triple Frontera y la subregión del Lago Chad.

Además de su papel como fuente de autodefensa, el comercio ilícito de armas también se ha convertido en un vector de desarrollo económico para las comunidades locales, que a menudo carecen de fuentes legales alternativas de ingresos. Así, la necesidad de las poblaciones locales de armarse contra los múltiples retos a los que se enfrentan en un contexto prolongado de inestabilidad ha dado lugar a la posesión de un gran número de armas de fuego, de las que sólo una pequeña parte están legalmente registradas.

Lo anterior apunta a que el vínculo entre este tipo de economías ilícitas, las dinámicas del conflicto y la inestabilidad han dado rienda suelta para que el extremismo violento se adapte a este contexto y evolucione con el tiempo, cambiando tanto la naturaleza de la amenaza como la respuesta a la misma. Los resultados de la investigación sugieren que tanto la rama de Daesh afincada en África Occidental (ISWAP) como su principal rival (Boko Haram) operan en zonas donde el mercado ilícito de armas es activo y ofrece varias oportunidades de suministro. No es probable que hayan coordinado el tráfico de armas a larga distancia para adquirirlas, sino que otros actores pueden haberlas trasladado desde mercados ilícitos más distantes a otros más cercanos. Por su parte, organizaciones afiliadas a Al Qaeda y otros grupos extremistas violentos aprovechan cada vez más el deterioro del orden público en la subregión, asegurando suministros de armas en puntos estratégicos de tránsito relativamente cercano como Libia y empleándolas para expandir sus intereses estratégicos a expensas de una parte de la población que a menudo termina por convivir con las normas y leyes bajo su ideología radical.

Debido al creciente grado de convergencia entre grupos criminales y entidades terroristas, así como las dinámicas de violencia por parte de estos últimos, los esfuerzos han tratado de contrarrestar su sinergia y poner barreras frente a una potencial acción común. Así, las estrategias actuales han tenido un éxito evidente pero limitado a la hora de abordar el vínculo entre ambos ámbitos delictivos, subrayando la necesidad de establecer nuevos enfoques tanto para combatir eficazmente el mercado ilícito de armas como para reducir la amenaza del terrorismo en las distintas subregiones de estudio. Reforzar

el control y la seguridad de las fronteras, centrarse en las redes financieras, abordar la demanda y promover la cooperación internacional son parte de la respuesta para avanzar en la resolución de esta fuente de inestabilidad a medida que se mejora la seguridad regional, evitando así que la problemática trascienda hasta convertirse en una amenaza a escala mundial.

6. Referencias

Adesina, F. (2022). *President Buhari Calls for Tighter Security Around Borders in Lake Chad Basin with the Proliferation of Weapons from Russia-Ukraine War*. Oficina de Presidencia de Nigeria.

Aguilera, A. (2022). *Tráfico de drogas y yihadismo en África*. Observatorio Internacional de Estudios Sobre Terrorismo.

Aguilera, A. (2023). El terrorismo y su relación con el contrabando y el tráfico de armas en África Occidental. En Igualada, C. et al., *Anuario del Terrorismo Yihadista 2022*. Observatorio Internacional de Estudios Sobre Terrorismo.

Albrecht, P. et al. (2017). *An Untapped Resource: African Forces in Intelligence Gathering: Inequality in MINUSMA #2*. Danish Institute for International Studies.

Associated Press. (2016). *Nigerian Military: Some Officers Selling Arms to Boko Haram*. VOA News.

Babuta, A. y Haenlein, C. (2018). *Commodity Smuggling in the Maghreb: A Silent Threat*. OCP Policy Center.

Baudais, V. y Maïga, S. (2022). *The European Union Training Mission in Mali: An Assessment*. SIPRI Background Paper. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Bird, L. y Tagziria, L. (2022). *Organized Crime and Instability Dynamics: Mapping Illicit Hubs in West Africa*. GITOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime)

Bromley, M., Maletta, G., y Brockmann, K. (2018). *Arms Transfer and SALW Controls in the Middle East and North Africa: Mapping Capacity-building Efforts*. SIPRI.

CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental). (2022). *Fight against transnational organized crime (TOC) in West Africa*.

Clarke, C. (2023). *How Russia's Wagner Group Is Fueling Terrorism in Africa*. Foreign Policy.

Conflict Armament Research. (2016a). *Investigating cross-border weapon transfers in the Sahel*.

Conflict Armament Research. (2016b). *Standardisation and Quality Control in Islamic State's Military Production*.

Conflict Armament Research. (2017). *Weapons of the Islamic State: A three-year investigation in Iraq and Syria*.

Conflict Armament Research. (2022). *Weapon supplies fuelling terrorism in the Lake Chad crisis*.

Consejo de Seguridad. (2019). *Resolution 2482 (2019) Adopted by the Security Council at its 8582nd meeting, on 19 July 2019*. S/RES/2482. Naciones Unidas.

De Coning, C. y Karlsrud, J. (2021). *Enhancing the Effectiveness of the G5 Sahel Force by Strengthening Strategic Coherence and International Support*. Norwegian Institute of International Affairs (NUPRI).

De Tésières, S. (2018). *At the Crossroads of Sahelian Conflicts*. Small Arms Survey/SANA project.

Demuynck, M., Mehra, T., & Bergema, R. (2020). *ICCT Situation Report: The Use of Small Arms & Light Weapons by Terrorist Organisations as a Source of Finance in the Middle East and North Africa*. Collaboration, Research & Analysis Against the Financing of Terrorism-project (CRAAFT).

Dhaouadi, R. (2019). *What drives illicit trade in North Africa?* ENACT Africa.

ENACT (Enhancing Africa's response to transnational organized crime). (2018). *Overview of Serious and Organized Crime in Africa*.

ENACT (Enhancing Africa's response to transnational organized crime). (2019). *What drives illicit trade in North Africa?*

EUBAM Libya. (2023). *EUBAM Libya Participation to the World Border Security Congress in North Macedonia*. EUBAM Libya - Press and information team.

Fares, S. (2023). *Up in arms: The Middle East as the world's illicit arms depot*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Florquin, N., Lipott, S., & Wairagu, F. (2019). *Weapons Compass: Mapping Illicit Small Arms Flows in Africa*. Small Arms Survey.

Fragile States Index. (2021). *Global Data | Fragile States Index*. [Fragilestatesindex.org](https://www.fragilestatesindex.org).

Guiffard, J. (2023). *Operation Barkhane: Success? Failure? Mixed Bag?*. Institut Montaigne.

GITOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime). (2021). *Global Organized Crime Index 2021*.

Global Organized Crime Index, (n.d.). *Country Profile: Libya*.

Ibrahim, A. (2020). *Rise and Fall? The Rise and Fall of ISIS in Libya*. U.S. Army War College.

Igualada, C. et al. (2022). *Anuario del Terrorismo Yihadista 2021*. En Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre). (2022). *Country Profile Libya: Displacement Data*.

INTERPOL. (2022). *Arrests, thousands of seizures in African clampdown on firearms trafficking*. INTERPOL.

Jesse, G. (2021). Arms trafficking: Fueling conflict in the Sahel, *International Affairs Review*, 29, 2

King, I. (2023). *How France Failed Mali: the End of Operation Barkhane*. Harvard International Review.

Mangan, F., y Nowak, M. (2019). *The West Africa-Sahel Connection: Mapping Cross-border Arms Trafficking*. Small Arms Survey.

McGregor, A. en Hafez, M. et al. (2017). *CTC Sentinel*. Combating Terrorism Center at West Point, 10(10).

Micallef et al. (2019). *After the Storm: Organized crime across the Sahel-Sahara following upheaval in Libya and Mali*. Global Initiative Against Transnational Organised Crime.

Nellemann et al. (2015). *Libya: a growing hub for Criminal Economies and Terrorist Financing in the Trans-Sahara*. The Global Initiative against Transnational Organized Crime.

North Africa Post. (2023). *Africa's new alliance in the making? — Burkina, Guinea, Mali junta regimes hold talks*.

Odey, S. et al. (2022). Small arms and light weapons smuggling and Boko Haram challenge to Nigerian security: A case study of the Benin-Nigerian porous border. *Journal of Liberty and International Affairs*, 8 (3):378-98.

Oficina de Lucha contra el Terrorismo. (n.d.). *Nexo entre el terrorismo, las armas y la delincuencia*. Oficina de Lucha contra el Terrorismo.

Okumu, W. et al. (2023). *Illicit arms flows in the Karamoja Cluster: actors, markets, impacts and alternative responses*. Research Paper Issue 35. ENACT

Panel de Expertos. (2015). *Letter dated 23 February 2015 from the Panel of Experts established pursuant to resolution 1973 (2011) addressed to the President of the Security Council*.

Panel de Expertos. (2016). *Letter dated 4 March 2016 from the Panel of Experts on Libya established pursuant to resolution 1973 (2011) addressed to the President of the Security Council*.

Panel de Expertos. (2017). *Letter dated 1 June 2017 from the Panel of Experts on Libya established pursuant to resolution 1973 (2011) addressed to the President of the Security Council*.

Pytlak, A. (2020). *Small Arms and Light Weapons: Africa*. Religions for Peace.

Raineri, L. (2018). Human smuggling across Niger: state-sponsored protection rackets and contradictory security imperatives. En *Journal of Modern African Studies*. Cambridge University Press. 63-86

Secretario General. (2020). *Situation in Mali*. S/2020/476. Consejo de Seguridad.

Security Council Report. (2012). *Letter dated 17 January 2012 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council*.

Security Council Report. (2023). *Letter dated 13 February 2023 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council*.

Small Arms Survey. (2020). *Global Firearms Holdings*. www.smallarmssurvey.org.

Strazzari, F. y Zampagni, F. (2018). Illicit firearms circulation and the politics of upheaval in North Africa. En Duquet, N. y Goris, K. *Firearms acquisition by terrorists in Europe - Research findings and policy recommendations of Project SAFTE*. Flemish Peace Institute.

Stronski, P. (2023). *Russia's Growing Footprint in Africa's Sahel Region*. Carnegie Endowment for International Peace.

Transparencia Internacional. (n.d.). *Corruption Perceptions Index*.

UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute). (2021). *Illicit Financial Flows and Asset Recovery in the State of Libya*. Research Paper.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). (n.d.). *Firearms Trafficking*.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). (2013). *Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment*.

Leggett et al. (2022). *Firearms Trafficking in the Sahel Transnational Organized Crime: Threat Assessment — Sahel*. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)

Vik Bakken, I. y Aas Rustad, S. (2018). *Conflict Trends in Africa, 1989–2017*. Conflict Trends 06. Norway Peace Research Institute Oslo (PRIO).



OIET

OBSERVATORIO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO



COVITE

Colectivo de Víctimas
del Terrorismo